

# COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LA SEGURIDAD SOCIAL

## ACTA-CONVOCATORIA NRO. 30 28 DE ABRIL DE 2010

Siendo las 08H45 del día miércoles veintiocho de abril de 2010, se reúnen los Asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, la señora presidenta solicita al señor secretario que constate si existe el quórum correspondiente, estando presente los Asambleístas: **Dora Aguirre, Armando Aguilar, Linder Altafuya, María Augusta Calle, Kléver García, Tito Nilton Mendoza, Carlos Samaniego, Nivea Vélez**, seguidamente luego de constatar el quórum, la señora Presidenta da por instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura al orden del día: 1.- Continuación del tratamiento conocimiento del articulado Proyecto de Ley de Servicio Público para Informe de Segundo Debate de la disposición general novena.

Interviene la señora Presidenta de la Comisión, señores y señoras Asambleístas, es nuestro interés poder avanzar con los artículos señalados, las transitorias y los artículos que quedaron rezagados si se quiere en el debate. Interviene el Asambleísta, compañera Presidenta, compañeros Asambleístas, con el respeto que todos nos merecemos y no con la intención de interrumpir el desarrollo de nuestro análisis quisiera pedirles de manera especial, ha venido el Señor Vicepresidente del Servicio Aduanero, el quiere hacer una exposición pequeña, ligera de un pedido que hicieron que se derogue algún articulado, entonces quisiera si le podemos escuchar para continuar con nuestro proceso. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo les recuerdo Asambleístas que fue una decisión de ustedes, que mientras no terminemos el tratamiento de la ley, no vamos a recibir comisiones sin embargo como este señalado está aquí el señor podríamos quizás escucharle unos cinco minutos, para no distraer el tiempo. Interviene el Ing. Juan Carlos Cevallos, Vicepresidente de la Cooperación Aduanera, buenos días señores Asambleístas, vengo en representación, soy el Vicepresidente de la Asociación Empleados del Servicio de Vigilancia aduanera, una institución que abarca alrededor de 500 familias, nosotros venimos con el único propósito de exponerles a ustedes sobre la disposición general vigésima, que en su parte pertinente dice: Los servidores y servidoras que exclusivamente integran el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por las circunstancias de supuesto con la naturaleza del trabajo y la seguridad y su integridad personal, podrán ser cambiadas administrativamente por ciertas unidades de la entidad en el territorio nacional y por períodos de acuerdo a las necesidades institucionales excepcionándose para este efecto lo que disponen los artículos cuarenta inciso tercero y cuarenta y uno de esta ley. Prácticamente nosotros hemos considerado que esta disposición violenta los derechos constitucionales consagrados para los trabajadores, por cuanto los artículos tres y once de la Constitución de la República establece que todas las personas tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la Constitución, por lo tanto siendo nosotros parte de la Corporación Aduanera Ecuatoriana siendo un departamento de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, se nos está excluyendo prácticamente de los mismos derechos que gozan todos los trabajadores y servidores públicos, nosotros prácticamente no somos ni militares, no somos ni policías, nosotros somos servidores públicos de carrera y por lo tanto debemos gozar de las mismas oportunidades y los mismos derechos de todos los trabajadores, aparte de esto, de que hemos considerado de que es inconstitucional porque también

W

atenta la seguridad jurídica, atenta la estabilidad familiar, la estabilidad emocional y la estabilidad laboral de todos los que conformamos el servicio de la vigilancia aduanera, esto en manos de una sola autoridad que podría ser la autoridad nominadora o del director del servicio de vigilancia aduanera podría acarrear consecuencias peligrosas, por que el manejo de un personal que en este caso se encarga de controlar lo que es la evasión de impuestos, de controlar la entrada ilegal de mercancías al territorio nacional, al ser esta con esta disposición al dar a una sola persona la facultad de mover a su antojo al personal a diferentes unidades de la república, provocaría lo que tal vez antes se eliminó que fue la Policía Militar Aduanera, como le explicaba esto podría causar graves problemas porque al trasladar sin consentimiento del personal, podría armar los grupos que anteriormente se conocía lo que es las Aduanas para que se ocasionen actos irregulares o actos de corrupción, esto prácticamente está siendo apoyado por muchas personas que tal vez son vestigio de lo que fue la policía militar aduanera, porque quieren recuperar ese poder, entonces si nosotros establecemos esta herramienta para el manejo del personal, podríamos provocar algo que realmente resultaría a la larga peligroso para no solo a la institución sino para el país, por eso es mi deber como ciudadano y como miembro del directorio del Servicio de Vigilancia Aduanera, venir ante ustedes para hacerles ver que realmente esto podría causar en unas manos inescrupulosas, podría causar realmente un caos o podría ser peligroso para la administración aduanera. Por último también como les decía, quisiera que se tome en cuenta que todos los trabajadores gozamos de los mismos derechos, por lo tanto les pediría a Ustedes que no se discrimine de esta forma y nuestra propuesta es la eliminación de esta disposición general vigésima, entonces yo desde antemano les agradezco la atención de Ustedes y pongo en su consideración. A algunos asambleístas les hemos hecho llegar por escrito ya esta propuesta que les hemos con el fin de propender a que nuestra institución siga siendo y manteniéndose como hasta ahora ha sido, el manejarse de acuerdo a la política establecida por el gobierno y por los administradores de turno, la Corporación Aduanera Ecuatoriana no tiene que volver a ser como era antes, como la Constitución establece las leyes tienen que ser progresivas mas no regresivas, si nosotros dejamos que esto pase estaríamos regresando a lo que alguna vez o en otra hora fue la Policía Militar Aduanera. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, solamente recuerdo que el artículo fue propuesto por quien presento la ley que fue el Ejecutivo como colegislador, el artículo lo hemos mantenido tal cual como lo presentó el ejecutivo porque teníamos y tenemos claro que es el Ejecutivo el que tiene la claridad de los procesos que se dan en la Aduana, sin embargo hay una propuesta de Ustedes nosotros estamos dándole una nueva mirada a la ley y vamos a ver lo que pasa en este artículo que vino desde el Ejecutivo. Interviene el señor Secretario, Novena.- Se establece que las remuneraciones mensuales unificadas de las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo tres de esta ley, mientras trabajen en las instituciones públicas de la provincia de régimen especial de Galápagos percibirán la remuneración mensual unificada establecida en los grados de valoración de las escalas de remuneraciones vigentes para el Ecuador Continental emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales multiplicadas por dos y sobre el valor total se aportara a la seguridad social. Revisar observación de Asambleísta Cisneros. Comisión retirar este valor total se aportará a la seguridad social. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo quiero informarles y recordarles que el último tema de debates fue justamente esto, cuando el Asambleísta Bilema pedía y creo que fue un acuerdo de aquí de la Comisión, poder que en razón de que en Galápagos se percibe el doble de remuneración, se debería también establecer en esta ley, se debería establecer en el monto por su posición de partidas y ahí surgió el planteamiento del Asambleísta Cisneros de que debería ser para el Oriente, la Asambleísta Cevallos pedía que se incluya Esmeraldas; y naturalmente la Asambleísta Consuelo Flores pedía que se incluya la Provincia del Guayas, un poco quedó ahí el debate, yo quisiera que lo retomemos, que

actuemos con absoluta seriedad y responsabilidad porque podemos decir muchas cosas con facilidad, pero realmente en la práctica un poco se dificulta, nuestro anhelo es grande porque no solo que se duplique a cada quien en las remuneraciones, sino que se pongan sueldos de dignidad pero tenemos también que apegarnos a la realidad, yo dejo abierto para continuar el debate en este punto porque ahí lo suspendimos. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, compañera Presidenta, compañeros Asambleístas, yo pienso que no debemos prolongarnos demasiado en el análisis de este artículo, en tanto y en cuanto creo que estamos conscientes, somos claros de que aquí en nuestras provincias tenemos una remuneración, yo se que de pronto el sueldo básico que ganamos no alcanza para el sustento y para solventar todas las situaciones económicas que se requiere en un hogar o en una familia, pero no estamos hablando en cuanto a la remuneración que percibe cada uno de los servidores públicos y en torno a la familia, sino que más bien en torno a la ubicación y a las dificultades que tendría Galapagos con relación a las otras provincias del país, y que allá no es que solamente para este tema de sueldos es que están ganando ellos el doble de la remuneración y que debería ser igual pues en torno a sus liquidaciones o indemnizaciones tendrían que ser igual, solamente creo que con esa consideración quisiera yo que los demás compañeros analicemos y viabilicemos el análisis de este articulado. Interviene la señora Presidenta encargada Asambleísta Dora Aguirre, esta en consideración señores asambleístas, sino hay mas observaciones pasamos al siguiente artículo. Interviene el señor Secretario, No Objeción a la Novena. Décima.- Con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, el Ministerio de Relaciones Laborales, podrá intervenir en las unidades laborales de Recursos Humanos mediante informes motivados de gestión de control en los que se podrá establecer sanciones y responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, cuando las instituciones y personas jurídicas del sector público comprendidas en el artículo tres de esta ley no dieran cumplimiento a la normativa que emite el Ministerio de Relaciones Laborales y a las disposiciones de la presente ley. Sugerencia Asesores: Las sanciones y responsabilidades administrativas se aplicarán respetando los derechos de la defensa y al debido proceso. Interviene la señora Presidenta encargada Asambleísta Dora Aguirre, creo que es pertinente la recomendación de los compañeros asesores. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, yo creo que esto es muy adecuado a la recomendación y sugerencia que hacen los compañeros asesores, porque esto tiene que establecerse como norma y como característica general que tiene que respetarse los derechos a la defensa y al derecho al debido proceso, me parece que eso está correcto y solamente quisiera hacer una ligera observación, en el inicio del análisis de este artículo de la décima transitoria, que se le ponga se le incluya el término que dice: El Ministerio de Relaciones Laborales con excepción de los Gobiernos Autónomos intervendrá en las unidades de administración, porque estamos ingresando directo con la excepción de los gobiernos autónomos, más bien le indiquemos que el Ministerio de Relaciones Laborales será el que intervenga, le reubicamos nomas. Interviene el Asambleísta Klever García, señora Presidenta, compañeros, la intervención es en las unidades de administración de recursos humanos, mediante informes motivados de gestión de control en las que se podrá establecer sanciones y responsabilidades; debe ser para todas las instituciones porque están hablando de intervención para establecer las responsabilidades y sanciones, no debe haber la excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la parte de administración, debe ser para todas las instituciones en general. Interviene la señora Presidenta encargada Asambleísta Dora Aguirre, por una parte el asambleísta Klever García plantea que no debe ser excepción, los Gobiernos Autónomos en cuanto al control del Ministerio de Relaciones Laborales en lo que refiere a los recursos humanos. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, de la lectura de la disposición general décima, le podemos deducir que se trata de un control que el Ministerio de Relaciones Laborales va a realizar, no al personal de las identidades públicas, sino a las unidades de

administración de recursos humanos y va a ser una intervención respecto a si se aplican o no se aplican las disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, en lo que respecta de pronto a evaluación, en lo que respecta a seguimiento, a control, a la aplicación de la normativa legal, como dice Klever debería ser de carácter general, porque es la ley de servicio público para todos los sectores, deberíamos eliminar de esta excepción. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, yo quisiera explicar no mas el trasfondo de la norma hecho la exclusión de los niveles autónomos descentralizados, porque sería un órgano de la función Ejecutiva la que según como estaba en el primer debate podría sancionar o intervenir, dice intervenir en las unidades de recursos humanos que son de Gobiernos Autónomos Descentralizados y ahí es claro que la autonomía si es administrativa. Sin embargo eso no significa que están exentos de cumplir con las normas legales ¿no?, entonces ese fue un tema que se trato y se ha venido tratando con quienes hacen AME, CONCOPE, los propios servidores municipales, una de las observaciones recogidas por parte de AME y FENACOPE, sinceramente consideramos que es lo más correcto que estén excluidos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero Ustedes señores asambleístas están en su potestad de decidir la norma. Interviene la Asambleísta Consuelo Flores, señora presidenta aquí bien clarito nos están dando una sugerencia los asesores. Las sanciones y responsabilidades administrativas se aplicarán respetando a los derechos, a la defensa del debido proceso, correcto, porque al decir Gobiernos Autónomos Descentralizados ellos saben que tienen su responsabilidad administrativa y que tienen que respetar el debido proceso conforme a los pagos que se tengan que dar administrativamente, aquí está de mas en los que se podrá establecer sanciones y responsabilidades administrativas a lo que tiene lugar cuando las instituciones y personas jurídicas del sector público comprendidas en el artículo tres, en el artículo tres nos están hablando que estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, derechos y obligaciones, nepotismo y procedimientos disciplinarios, las empresas públicas, las corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles con o sin fines de lucro, con o sin finalidad social o pública cuya participación en el capital o patrimonio estén compuesto por lo menos por el 50% por aporte de las instituciones del estado de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de recursos públicos, entonces ¿porqué se vuelve a tomar el asunto del artículo tres cuando se le dice con excepción a los de Gobiernos Autónomos Descentralizados?, aquí no hay concordancia, por un lado nos deja sin efecto por le da excepciones y por el otro lado se está nombrando que con el artículo tres tienen que cumplir todas estas instituciones que pertenecen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no solo a corporaciones y fundaciones pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados. Interviene la señora Presidenta de la Comisión Nivea Vélez, solo quería hacerles la siguiente reflexión se ha trabajado y no en otra instancia que no o sea aquí la comisión el día de ayer, el lograr un acuerdo entre los servidores la Confederación de Servidores Municipales el CONCOPE y la AME, yo creo que hay que conocer el trabajo importante de los asesores, yo no hice sino venir a ver que estén trabajando no por supervisar, sino porque fueron invitados los señores de la AME CONVOPE y CONAJUPARE y también los Servidores Municipales, si ya hemos logrado que ellos lleguen acuerdos no sé si convenga de nuevo nosotros volver a desbaratar lo que ha sido ya un acuerdo entre dos grupos absolutamente opuestos y ese es el mérito de esta comisión, aquí lo hicimos el día de ayer, entonces no habido la necesidad de llegar a forzar paro de los servidores municipales, protestas de los alcaldes, que si la hicieron pero la hicieron sin fundamento, se llegó ayer a un acuerdo y si nosotros desbaratamos lo que es fruto de ese acuerdo; uno de los temas más cuestionados es que el Ministerio de Relaciones Laborales intervenga directamente con las unidades de personal o de recursos humanos, esto no significa que están exentos de todos los procesos de calificación, ascensos, inclusive se está discutiendo el tema de remuneraciones, eso no significa que van a ser un mundo aparte, pero significa que los

ministerios no tendrán injerencia directa en los gobiernos autónomos descentralizados. Yo creo que ese es un tema que hay que pensarlo bien, ayer inclusive hubo una muy buena reunión, aquí vi que trabajaban hasta casi la noche cuando yo me retiré todavía estas personas quedaron aquí. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, una pregunta que les formulo y que les hago a Ustedes. Qué tal si por ejemplo, en algún municipio de cualquier provincia, el alcalde o cualquiera que esté a cargo de la unidad administrativa de recursos humanos se le ocurre no cumplir con la normativa general con respecto a las remuneraciones de sus trabajadores y como dice: No tenemos presupuesto a ustedes les voy a pagar lo que a mí se me ocurre, o qué tal si en otro municipio un alcalde y una unidad administrativa de recursos humanos mucho más generosa dice: a ustedes les vamos a incrementar los salarios mas allá de lo que está regulado a nivel nacional. ¿Quién regula eso?, ¿Quién controla?, si cada quien a su libre albedrío, a unos más, a otros menos, a otros desproporcionados y a otro por debajo de lo que es la normativa legal general, entonces yo si quisiera que nos hagamos esa pregunta y busquemos respuesta frente a estos hechos que si se han dado en el pasado y que posiblemente se continúen dando en el presente, entonces frente a que es que yo entiendo que esta disposición general busque un mecanismo para no interferir en la gestión administrativa para no interferir en la gestión de recursos humanos, sino para intervenir en esas unidades que incumplan con las disposiciones y normativas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, y tiene que ser inclusive motivada esa la intervención a efectos de que no vaya a intervenir en las legítimas decisiones orgánicas, administrativas, autónomas que tienen las unidades de administración de recursos humanos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no van a intervenir en la gestión de recursos humanos, van a intervención en la aplicación de la normativa general dictada por el ministerio, que me parece algo lógico, sino quien defiende los intereses también de los trabajadores en todas las circunstancias territoriales. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, totalmente de acuerdo, he dicho permanentemente a que los alcaldes han cometido y cometen abusos y excesos en el tema remuneraciones, pero entiendo que hay otros artículos a los que esta asegurándose, incluso repito, ayer se estaba llegando a un acuerdo entre la Confederación de Servidores y la AME en este punto. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, por informarles señores asambleístas, ayer de parte de AME y CONCOPE nos hicieron llegar algunas observaciones en las que discutimos también con la confederación de exteriores municipales matriz en la que en algunos puntos casi el 70, 80% están de acuerdo y en algunas partes se separaron en proporciones de la observación propuesta por quienes representan a AME o CONCOPE, en esas observaciones ya no se incluyó sinceramente esta, que fue la que se trató porque estaba el borrador a disposición pues y criterio de Ustedes, esa era la que más se observaba, que no podrían intervenir un ente del Poder Ejecutivo para determinar sanciones a cierta persona de otro poder, en una unidad de administración de recursos especialmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados de pronto ellos, lo que más se habló es que podrá establecer sanciones y responsabilidades administrativas inclusive al tratar este artículo, decían pues que podían intervenir pero que no se emitan las sanciones en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sino que se emitan que se yo unas recomendaciones ese fue un tema que ya no se lo llevó a la matriz, porque ya estaba elaborado, un borrador para que esté en discusión de ustedes, según ustedes decían pues el día de hoy será de comunicarles a los señores servidores y a los que representan AME y CONCOPE para que pues lo revisen y vean como está la disposición. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo creo que es un tema que tiene que ser debatido y resuelto aquí en la Comisión, yo hago conocer que hay un acuerdo que lo ha ratificado el asesor porque ellos estuvieron trabajando, me parece que Fico, Carlos y Darío, los asesores de María Augusta y el asesor de la Comisión, hay un acuerdo pero eso no significa que ustedes no puedan tomar la mejor decisión aquí. Interviene la Asambleísta

Dora Aguirre, comparto la intervención que hacía anteriormente el compañero Armando Aguilar en el sentido de que el Ministerio de Relaciones Laborales, creo que debe intervenir a la hora de hacer cumplir la ley cuando estamos hablando de que puede establecer sanciones y responsabilidades administrativas, está diciendo a las instituciones y personas jurídicas que comprende el artículo tres a las instituciones, es decir, cuando un ayuntamiento no cumpla con la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales en este caso o con esta ley y la reglamentación supongo que luego le corresponde a la entidad del Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto yo creo que no está en absoluto reñida con la autonomía del municipio, puesto que nuestra principal responsabilidad es proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y no estamos hablando de otra acción más del Ministerio de Relaciones Laborales que hacer cumplir esta ley y la reglamentación que se produzca a raíz de que aprobemos esta ley. Interviene la Asambleísta Consuelo Flores, señora Presidenta sí, aquí se aprobó en la Constitución y dice que nosotros no tenemos que ver el principio constitucional, tenemos que enmarcarnos dentro del aspecto legal dentro de los principios constitucionales y cumplir con lo que dice, el régimen de competencia en el capítulo cuarto la Constitución, en el artículo 160 manifiesta: "el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno". Significa que aquí está enmarcando de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados no se van a desalinear de los que tienen su cumplimiento en las políticas y permitiendo a los servidores públicos dentro del parámetro legal, por eso vuelvo y digo la moción que si ya se está hablando en la décima transitoria con excepción a los gobiernos autónomos descentralizados el Ministerio de Relaciones Laborales podrá intervenir en las unidades de administración de recursos humanos mediante informes motivados de gestión de control, lo está complementando el artículo 260 y no está excluyendo responsabilidad, eso es lo que está manifestando, o sea tenemos que hacer una coordinación de la Constitución y no violar lo que le aprobaron los legisladores anteriores. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, si no hay ningún otro criterio la propuesta se elimina la excepción. Interviene la Asambleísta Consuelo Flores, aquí somos legisladores que todos podemos dar nuestras opiniones y unos dicen se elimina, otros dicen estamos de acuerdo que no se elimine, vayanse en el capítulo primero la organización territorial del Estado en los principios generales, el artículo 238 señores me estoy basando en la Constitución lo que dice y lo que marca y que la mayoría de los asambleístas dicen en que tenemos que basarnos en los principios constitucionales y yo soy una de las primeras. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozaran de autonomía política administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana, en ningún caso en el ejercicio de la autonomía permitirá la sesión del territorio nacional, aquí mismo está diciendo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y si concordamos con el artículo de régimen para competencia el artículo 260 de la constitución, yo doy mi opinión que no se elimine la excepción. Interviene la Asambleísta Dora Aguirre, esta disposición décima no está eliminando la autonomía de los municipios en absoluto, o sea lo único que está diciendo es que el Ministerio de Relaciones Laborales que es la institución rectora en las políticas en el ámbito de relaciones laborales, podrá sancionar a las instituciones y personas jurídicas que incumplan la reglamentación que para que se ponga en marcha este proyecto de ley elabore el proyecto de relaciones laborales, es lo único que está diciendo, si nosotros le dejamos al municipio que haga su propia ley con sus propios trabajadores y ponga sus propios salarios sus propias sanciones, no tiene que haber una reglamentación a nivel nacional, por lo tanto yo ahí sí creo que lo único que hace esta disposición es eso, decir que si hay una institución que incumpla esta ley o la reglamentación deberá tener

sanciones como cualquier institución, como cualquier ministerio, como cualquier municipio de cualquier parte del país. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, me gustaría solicitar la opinión de los demás asambleístas, porque si no se va a volver con mucho legítimo derecho un diálogo de las dos compañeras que tienen mucho sustento ambas, pero no veo que hay la participación del resto y necesitamos tomar una decisión sobre este artículo. Interviene la Asambleísta Consuelo Flores, a veces tenemos que tomar en cuenta lo que dicen, que lo que se pone en la ley a veces son letras muertas, lo interpretamos a conveniencia y en el momento en que estamos o cuando nos da la gana interpretar o como la queramos interpretar, pero bien claro dice el artículo 260: el ejercicio de la competencia exclusiva no es cuidar el ejercicio concurrente de las gestiones de la prestación de servicios públicos destinados a la colaboración y complementariedad entre los distintos del gobierno. Y si hablamos del Ministerio de Relaciones Laborales quiere decir, que enfoca dentro de un nivel de gobierno que el Ministerio de Relaciones Laborales se maneja bajo la función ejecutiva, que es manejada por el Presidente de la República, por lo tanto aquí no está saliendo fuera del contexto, ni deslindando responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados y que no se puede acatarse y que se puede acatar las disposiciones, se sobreentiende que si nos hablamos de niveles de gobiernos de distintos niveles de gobiernos se sobreentiende pues que estamos entrando dentro de la función ejecutiva que es manejada por el ministerio perdón, el Ministerio de Relaciones Laborales es manejada por la función Ejecutiva entonces enmarcada en forma sintética dentro de esto lo que enfoca la disposición es lo que puedo decir. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, de lo que yo entiendo esta ley lo que pretende es tener un edificio, pensando que el estado es el edificio que tenga mil metros de altura y lo que estamos diciendo y esa es la autonomía es que los gobiernos locales, o las fuerzas armadas, o el magisterio pueden organizar esta torre de 1000 metros de diferente manera, pero que ninguno de estas instituciones que van a tener una cierta autonomía puede pasarse de los mil metros ni puede tener menos de mil metros, estamos poniendo un piso y un techo, eso es la autonomía el que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados puedan organizar de acuerdo a su propia dinámica, a sus propias necesidades pueda organizar, organizarse, pero eso no quiere decir que en este techo y piso esa organización pueda violentar derechos de los trabajadores, eso es lo que a nosotros nos interesa, no creo yo de ninguna manera que quitar esto con excepción de los gobiernos autónomos elimine la autonomía de los GAD's, de ninguna manera les estamos dejando con esa posibilidad porque toda la ley en distintos artículos no solamente es en este donde estamos hablando de los GAD's, estamos reconociendo esa posibilidad de auto organización que es en el ámbito de esta ley a lo que se refiere la autonomía ¿no es cierto?, pero que tienen que cumplir parámetros porque o sino no tiene sentido hacer una ley pues si entonces yo sí creo, ahora yo pregunto algo a los abogados, ¿es posible que sea el Ministerio de Relaciones Laborales el que tome las sanciones dentro de los GAD's?, ahí es donde estaríamos violando el principio de la autonomía, no en que se pueda regular bajo las normas de la ley sino quien emite la sanción, quien sanciona, es ese el punto y creo que el Ministerio de Relaciones Laborales no puede incidir en un gobierno autónomo descentralizado, pero sí creo que debe haber una gestión de control que permita un instructivo que permita preservar los derechos de los trabajadores para que dentro de los GAD's no se cometan arbitrariedades. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, señora Presidenta, señores Asambleístas muy respetuosamente esta disposición tenía sentido cuando en el artículo 58 del primer debate. El ministerio iba a nombrar a los jefes de las unidades de recursos humanos, entonces ahí el ministerio se convertía en autoridad nominador en principio y para sancionar primero hay que ser autoridad nominadora, sinceramente el problema es jurídico, no es relación jurídica servidor autoridad nominador, el Señor Ministro de relaciones laborales, el ministerio no es autoridad nominadora del alcalde de tal lado o el



jefe de recursos humanos de la alcaldía de Gonzanama, entonces ese es el problema entonces, si esa disposición se aprueba aquí va a ser lamentablemente improcedente y van a presentar juicios, y entonces no van a ver relación jurídica con quien va a sancionar. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, ¿Quién puede sancionar?. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, tiene que ser como ustedes ya mismo aprobaron en el artículo 58 la autoridad nominadora, en ese caso tiene que la autoridad nominadora de la alcaldía tiene que sancionar al jefe de recursos humanos; y si no es sancionado está desacatando la ley y al desacatar está incurriendo en un delito de otra naturaleza, y además por experiencia siempre la Contraloría ha sido la que ha determinado las responsabilidades administrativas en este caso y ha emitido las glosas, las responsabilidades, inclusive si es que ha existido por ejemplo, desacato a una norma, entonces se ha determinado los indicios de responsabilidad penal, eso recae sobre esta disposición una ley orgánica y también la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que es la que puede determinar las responsabilidades administrativas en este caso y no están exentos los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sinceramente respetuosamente a los señores Asambleístas es improcedente al no excluir a los gobiernos autónomos a pesar de que se pueda aprobar no va poder ser aplicada esta norma. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, yo creo que es problema de redacción simplemente, o sea que deben intervenir el ministerio para efectos de que los GAD's o cualquier institución pública y de los nombrados en el artículo tres cumplan con las disposiciones legales y lo que respecta a lo le faculta en el artículo 229 según el inciso y que no es invento de nosotros sino es una disposición Constitucional. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, revisemos el artículo 58. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, de pronto podría determinarse aquí un inciso a las unidades de administración de recursos humanos, eso fue un tema de los que se discutió ayer con los servidores de AME, por ejemplo ellos proponen que las unidades de administración de recursos humanos de los gobiernos autónomos descentralizados y sus entidades, son órganos ejecutores de aplicación de la ley y dependerán técnica y administrativamente, orgánica y funcionaria económica de sus debidas instituciones, esto de pronto podría ser aquí lo que se puede explicar digamos, las unidades de recursos humanos y entidades que dependen de los gobiernos autónomos dependerán técnica y administrativamente etc, de sus instituciones y aplicarán las normas de esta ley, las normas emitidas por el Ministerio de Relaciones y en caso de incumplimiento serán sancionadas por la autoridad nominadora sin perjuicio de lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría, podemos irlo trabajando eso está al criterio de ustedes. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, yo simplemente lo que quiero sugerir es que eliminemos la excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y dejemos la relación como sigue. El Ministerio de Relaciones Laborales podrá intervenir en las unidades de administración de recursos humanos mediante informes motivados de gestión de control en los que se podrá no establecer efectivamente no establecer sanciones sin responsabilidad sino en los que se podrá determinar responsabilidades y solicitar sanciones administrativas a quien diere lugar puede determinar responsabilidades y solicitar sanciones administrativas a que diere lugar. Lógicamente va a solicitar a los organismos internos de cada uno de los GAD's para que se apliquen ahí si va a determinar y solicitar. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, Alguna opinión respecto a la propuesta del Asambleísta Armando Aguilar?, nos parece que recoge un poco la preocupación que teníamos. Interviene Asambleísta María Augusta Calle, a mí me preocupa el eliminar esta parte de "con excepción", a mí me preocupa porque siendo prácticos, aunque el ministerio no establezca sino mosione, proponga, determine sanciones, eso ya es una intervención dentro de los propios gobiernos locales o sea, a mí me preocupa la parte jurídica y me preocupa que lo que estamos haciendo sea aplicable, entonces yo creo que dentro de los GAD's, los trabajadores lo que tienen es que saber que tienen una ley que les proteja y que en caso de que no sean cumplidos sus derechos,



4

¿Ante quien acuden?, ¿Ante la Contraloría?, ¿Ante la Procuraduría?, ¿Ante un juez?, yo insisto o sea, a mi me preocupa que sea el Ministerio de Relaciones Laborales el que haga esta acción de control, porque seamos claros o sea eso no va a ser; y es la otra cosa que el Ministerio de Relaciones Laborales no es organismo de control. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, compañeros, verán porque bien podemos caer en incoherencias, hablamos de una ley descentralizadora, de una Constitución descentralizadora y estamos intentando concentrar poderes en el Ministerio de Relaciones Laborales, esa fue la crítica que tuvimos en el primer debate, yo soy la primera en decir que tiene que asegurarse que tengan garantía los servidores municipales, no podemos lanzarlos a la aventura por quedar bien con los alcaldes, pero hagámoslo de manera que no violemos, no pongamos a los municipios como una parte más del Ministerio de Relaciones Laborales, la pretensión del ministerio fue desde el principio un poco esa y le hemos hido quitando por eso yo me reía que cuando marcharon los alcaldes no había ni siquiera sombra de que ellos nos demandaban ahí pero hagamos realidad eso ahora ya este es el informe ya definitivo, no sé si podamos poner ahí en que artículo quedaría, los servidores municipales aunque estaría demás recalcar protegidos por esta ley y todo lo demás en sus partes. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, si es inaplicable en un lado, tiene que ser inaplicable en todos los lados. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, para los gobiernos porque el poder Ejecutivo, el Estatuto de Régimen Ejecutivo si determina de que pues por ejemplo en caso del Ministro de Relaciones Laborales podría determinar qué se yo la jefatura del Ministerio de Educación una sanción por incumplimiento a esta norma como les digo tiene aplicación cuando iba el Ministro de Relaciones Laborales a nombrar los jefes en cada una de las instituciones, por ejemplo, les pongo un caso, los auditores son nombrados por la Contraloría entonces están regulados por la Ley de Contraloría y son nombrados por la Contraloría. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, yo creo que este artículo debe ser eliminado, el artículo tal como está planteado en el proyecto como décima disposición general debe ser eliminada y debe ser eliminada porque está en contraposición a lo que expresamente contempla a lo que está en la Constitución y además hay un reclamo de los municipios; y a la vez si hubiera sido bueno que aquí el asesor llegue a los alcances de los acuerdos a los que están llegando porque dado de que ayer ha habido una reunión de trabajo entre los municipios y los gobiernos provinciales y entre los servidores tanto de los gobiernos provinciales, como de los municipios del país, si sería bueno porque a esta Comisión no le conviene entrar en choque, cuando a nosotros nos conviene en función de lo que estamos haciendo que es elaborar la Ley de Servicio Público estar en plena concordancia con lo que dice la constitución, con lo que dice la constitución, hay municipios parten de una realidad muy concreta de las jurisdicciones y parten también de un lineamiento contemplado en la constitución que es la descentralización, no es que se trata de que el municipio pueda hacer lo que quiera de ninguna manera, porque hay organismos de control, hay organismos de control, pero si es contraproducente que el Ministerio de Relaciones Laborales aparezca y peor como fruto de esta ley, porque una cosa es el Código del Trabajo donde ahí si tiene ámbito pleno el Ministerio de Relaciones Laborales pero otra cosa es la ley de servicio público que aparezca como un ente centralizador y absorbente de todo, incluso desafiando la propia, los propios lineamientos descentralizadores y desconcentradores que contempla la Constitución, entonces yo por esa misma razón a la vez soy del criterio que debe ser eliminado este artículo en los términos que está planteado aquí. Interviene el Asambleísta Klever García; señora Presidenta, una vez que se ha debatido este artículo ya con los criterios de los compañeros y también los criterios recogidos en el pleno de la Asamblea Nacional, mi criterio también sería de que deben eliminarse, porque el Ministerio de Relaciones Laborales no va a poder estar en todos los lugares no es cierto en todas las unidades administrativas de recursos humanos entonces es un tema extremadamente complicado y

W

en base a los principios constitucionales de desconcentración y descentralización mi criterio es también que debe ser eliminado. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, la pregunta señor asesor es, ¿al eliminarlo totalmente no estaremos dejando también sin ninguna protección las otras áreas del sector ejecutivo?. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, si efectivamente señora Presidenta, señores asambleístas, se vuelve inaplicable el artículo 57 que habla por ejemplo de cuáles son las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales, además se vuelve inaplicable desarrollar la norma constitucional que dice: que la administración pública tendrá un órgano rector y pues al determinar rector es controlador; y al controlar efectivamente esta disposición lo que crea es una disposición más alta que un artículo con una fuerza, se diría un poco coercitiva que permita sancionar, entonces el control tiene que evidentemente ir a la par con la sanción, entonces sinceramente al eliminar la vuelta crearíamos un vacío que ya lo determina la LOSCCA que nadie puede controlar esta norma. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, no me parece que lo mejor es eliminar o ignorar un problema, yo creo que hay que enfrentarlo y debería hacer un análisis adecuado de lo que está ocurriendo. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle; yo creo que podríamos tener algo como que, el Ministerio de Relaciones Laborales viendo la pertinencia en que si y en que no, el Ministerio de Relaciones Laborales podrá intervenir en las unidades de administración de recursos humanos mediante informes motivados de gestión de control y la Contraloría General del Estado cuando se trate los Gobiernos Autónomos Descentralizados a fin de establecer sanciones y responsabilidades administrativas a que hubiere lugar. Entonces el ministerio podrá intervenir en las unidades de recursos humanos, la Contraloría General del Estado cuando se trata de los GAD's mediante informes motivados de gestión de control en los que se podrá establecer sanciones y responsabilidades. La idea es ponerle, Ministerio de Relaciones Laborales podrá intervenir en las unidades de administración de recursos humanos del Estado y la Contraloría General cuando se trate de los Gobiernos Autónomos Descentralizados lo podrá también hacer, las dos instituciones mediante informes motivados de gestión de control. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, yo planteaba lo siguiente, que se deje el Ministerio de Relaciones Laborales intervendrá en las unidades de administración etc. solamente en la parte final que deberíamos poner con excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a quienes les regulara y controlará la Contraloría General del Estado, sugiero para que quede un poco mas específico solamente para ellos, es la sugerencia que propongo al final. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, separamos los ámbitos, a los unos el Ministerio de Relaciones Laborales y a los GAD's, la Contraloría, yo quisiera acoger la sugerencia de los asesores, las sanciones y responsabilidades administrativas se aplicarán respetando los derechos a la defensa y al debido proceso. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, El Ministerio de Relaciones Laborales podrá intervenir en las unidades de administración de recursos humanos mediante informes motivados de gestión de control en los que se podrá establecer las sanciones y responsabilidades administrativas a las que hubiere lugar, cuando las instituciones y personas jurídicas del sector público comprendidas en el artículo tres de esta ley no dieran cumplimiento a la normativa que emita el Ministerio de Relaciones Laborales y las disposiciones de la presente ley, con excepción de los gobiernos autónomos y descentralizados y sus entidades quienes le regularan la Contraloría General del Estado. Interviene el señor Secretario, Décima.- El Ministerio de Relaciones Laborales podrá intervenir en las unidades de administración de recursos humanos mediante informes motivados de gestión de control, en los que se podrá establecer las sanciones y responsabilidades administrativas a las que hubiere lugar, cuando las instituciones y personas jurídicas del sector público comprendidas en el artículo tres de esta ley no dieran cumplimiento a la normativa que emita el Ministerio de Relaciones Laborales y las disposiciones de la presente ley con excepción de los Gobiernos Autónomos y

W

Descentralizados y sus entidades quienes a quienes a quienes los regulará la Contraloría General del Estado, las sanciones y responsabilidades administrativas se aplicaran respetando a los derechos a la defensa y al debido proceso. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, la redacción está bien, solo quisiera hacer ahí una reubicación de palabras nada mas compañeros, en la parte pertinente que dice mediante informes motivados de gestión en los que se podrá establecer sanciones y responsabilidad yo ahí solicitaría cambiar o reubicarle, primeramente se establecen responsabilidades, después vienen las sanciones porque no vienen primero las sanciones, entonces primero van las responsabilidades y luego las sanciones ese cambio. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, Consuelo estaba diciendo que el servidor cuando ha sido violentado en sus derechos va y reclama, pero la institución de control quien controla, no te pongas del lado del servidor porque hay muchísimas veces que la gente no reclama para no perder el puesto, aquí la idea es que también se garantice que desde arriba haya un control para que no violenten esos derechos, piénsale desde arriba entonces desde arriba está, en lo que es el Ejecutivo y eso está el Ministerio de Relaciones Laborales que tiene la obligación de vigilar que eso no pase, si te pagan más como alcalde te pagas mas no vas a ir a denunciar ante ningún juez, entonces quien controla desde arriba quien ve desde arriba en él, un caso el Ministerio de Relaciones Laborales y en el otro es la Contraloría para evitar excesos no solamente faltas. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, la Contraloría es organismo de control respecto del buen uso y manejo de los fondos públicos y de la aplicación por supuesto de las normas que tengan que ver con el uso adecuado de los fondos públicos, los servidores sujetos a esta ley de servicio público, no digamos el juez competente para los servidores de sujetos a esta ley no es el Juez de Trabajo que no es la sala de lo contencioso y administrativo de las cortes provinciales pues para tener claro las competencias y los ámbitos de reclamaciones donde se tiene que intervenir. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, la propuesta era de que con excepción de los gobiernos autónomos y descentralizados y sus entidades a quienes los regulara la Contraloría General del Estado y demás autoridades u órganos competentes y demás autoridades. Interviene el señor Secretario, Décima Primera. Los fondos provenientes de las multas y sanciones pecuniarias impuestas a las servidoras y servidores públicos por infracciones disciplinarias se depositarán en la cuenta única del estado, estos rubros serán destinados a la formación y capacitación de las y los servidores de la institución. Sugerencia Asesores. Décima primera. Los fondos provenientes de las multas y sanciones pecuniarias impuestas a las servidoras y servidores públicos por infracciones disciplinarias se depositarán en la cuenta única de la institución organismo o entidad a la que pertenece la o el servidor, fondos que serán destinados exclusivamente a la formación y la capacitación de las y los servidores de la institución. Hasta ahí la décima primera. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, yo acogería aquí la sugerencia de los asesores por una razón muy simple, si es que se deposita en la cuenta única del estado, quienes tienen quien hace la distribución de esos recursos es el Ministerio de Finanzas, si directamente es el Ministerio de Finanzas y la disposición de los fondos se realiza en conjunto con la SEMPLADES, mientras esta sugerencia de los asesores se deposite directamente en la cuenta única de la institución para que esta institución la maneje directamente en la formación de la gente, la diferencia entre el uno y el otro está en donde se deposita yo creo que lo más conveniente es que se deposite en la cuenta única de la institución. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, totalmente de acuerdo, no sé si hay algo contrario pero a mí me parece algo adecuado. Interviene el señor Secretario, Se acoge a su sugerencia asesores. Décimo Segunda.- Las servidoras o servidores públicos que hayan cumplido setenta años de edad previa evaluación podrán continuar prestando sus servicios en la institución, las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, cumplido los setenta años de edad habrán llegado al tope máximo de su carrera en el

servicio público independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados sin que puedan acceder ascender. Las servidoras y servidores que a partir de esta edad cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público les podrá ser aceptada su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de acuerdo a la tabla que para el efecto establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, las compensaciones anteriormente referidas será de siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio en el sector público hasta de doscientos salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Interviene el Asambleísta Kléver García, el pago tiene que hacerse por el Ministerio de Finanzas en tal sentido debe constar un último inciso que diga: "para efecto el Ministerio de Finanzas preverá y de manera anual designara los recursos necesarios para cumplir con este estímulo". Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, yo quiero que previo a que aprobamos o que pase este artículo primero, aclaremos porque me parece que aquí hay una contradicción: se dice las servidoras y servidores que a partir de esta edad cumplan los requisitos establecidos en las leyes de seguridad social para la jubilación y que quieren retirarse voluntariamente del servicio público les podrán ser aceptada su petición y se le reconocerá un estímulo y compensación económica de acuerdo a la tabla que para el efecto establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, está diciendo una cosa aquí no en este inciso pero en el inciso que viene dice: las compensaciones anteriormente referidas serán de siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio del sector público hasta de doscientos diez salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado del total, pero por un lado dice que tiene que regirse a la tabla que para el efecto tenga la ampliada el Ministerio de Relaciones Laborales y por el otro lado dice siete salarios básicos por cada año trabajado, entonces aquí hay una contradicción o tienen lo uno o tienen lo otro y yo creo que debe dejarse tal como estaba en el proyecto que aprobamos en primer debate, pues claro en el primer debate estaba la seguridad social de la institución en el artículo tres de esta ley cumplido los setenta años cuando las servidoras y servidores a partir de esta edad cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social por la jubilación requieren retirarse voluntariamente del servicio público, le serán les podrá ser aceptada su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de acuerdo a la tabla que para efecto establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria acorde a lo establecido en la letra c) del artículo 144 de esta ley, las compensaciones anteriormente referidas serán si aquí hay una contradicción y justamente en el primero ha pasado esta contradicción, yo creía que no estaba esta situación aquí porque incluso acá hay un agravante que dice: siempre que exista la disponibilidad y si no existe la disponibilidad no le darán nada, más bien debemos eliminar esta parte que dice que su petición, estímulo, compensación económica de acuerdo a la tabla que para el efecto eso debe ser eliminado y más bien dejarle tal como está en el segundo inciso. Interviene Asambleísta María Augusta Calle, sí, estoy de acuerdo hay una contradicción, porque ahí dejamos abierta las posibilidades, o sea no estamos regulando nada, estamos dejando de acuerdo a la tabla que ponga el ministerio que puede ser un salario por cada año de servicio o cuarenta en el segundo inciso yo estoy de acuerdo. Interviene la señora Presidenta encargada Asambleísta Dora Aguirre, estamos de acuerdo respecto a las reflexiones que hacía tanto el Asambleísta Linder Altafuya y María Augusta Calle. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, yo no estoy de acuerdo con el primer inciso, no porque dice las servidoras y servidores públicos que hayan cumplido setenta años de edad previa evaluación podrán seguir prestando servicios a la institución, esto no es solo para los de setenta es para los de veinte, veinte y uno, veinte y dos, veinte y tres, veinte y cuatro, para todos los servidores la evaluación y si no cumplen los parámetros de la evaluación simplemente se establece mecanismo administrativo, de tal manera que está

por demás ese primer inciso, o sea no tiene ninguna lógica, ningún sentido, mas debajo de alguna manera se aclara pero yo les quiero recordar bueno hay criterios divididos también en los conceptos, porque hay personas que quisieran tener la posibilidad de beneficiarse al estímulo de la jubilación no a una edad muy avanzada, hay personas que dicen a los 65, a los 30 años de servicio, a los 35 yo quisiera salir, yo quisiera estar libre, entonces nosotros le estamos poniendo 70 realmente no sé cual sea la media de vida en el país, es decir estamos poniendo algo realmente mas allá de la media de vida, de las posibilidades de vida, yo creo que como hay posiciones distintas, pero yo he escuchado a mucha gente y a muchos servidores que dicen ojalá yo a los 60 ya quisiera estar libre con mi estímulo de pensión, eso si con una pensión jubilar mensual bien decente y digna, ahí si tenemos que la Ley de Seguridad Social mejorar esas condiciones pero decirles que a los 70 u 80 años puedan seguir trabajando bueno pensemos eso. Interviene el Asambleísta Kléver García, yo manifestaba también que quien debe entregar los recursos es el Ministerio de Finanzas, por eso manifestaba señora Presidenta, que debemos incluir un inciso que para este efecto el Ministerio de Finanzas provera y de manera anual destinará los recursos necesarios para cumplir con el estímulo que se está poniendo aquí en el artículo de la inclusión general décima segunda. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, para referirme al afecto que tiene que ver con los 70 años de edad, porque ya la jubilación en los términos que esta contemplada en la Constitución ya está enmarcada en este proyecto de ley, aquí solamente nos referíamos a la persona que cumplía 70 años porque recuerden ustedes que el debate que tuvimos en el primer debate, fue en el sentido de que una persona por el hecho de cumplir 70 años no se la puede ya sacar a la fuerza del trabajo, no se puede discriminar por el hecho de que cumpla 70 años, ese es el aspecto de este artículo solamente ese es el aspecto, porque recuerdo que poníamos el ejemplo que en el año 2009 los que ganaron el premio nobel en economía, en medicina todos superaban los 70 años, yo creo que si tiene que quedar la cuestión de los 70 años con las consideraciones que hicimos anteriormente, que se le quite desde la petición una vez presentada su petición y se le ponga lo que tenga el segundo inciso, pero que se quede los 70 años de edad, porque justamente la consideración especial en este artículo era solamente sobre ese aspecto para no marginar por el hecho de la edad, los que cumplan 70 años y que quieran seguir trabajando y que están en condiciones de hacerlo, no se prive a la institución y al Estado de un aporte de la experiencia pues de aquel que todavía está en sus plenas facultades, ese era el sentido mismo de este artículo. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, observamos lo que los asesores nos ponen también ahí, como que podría este artículo ser inconstitucional, porque también hay que partir de eso. Interviene el Dr. Carlos Paladines, señora Presidenta, en el analisis hecho con el equipo de asesores observamos que los palabras, "sin que puedan ascender", pueden ser declaradas inconstitucionales, es una discriminación a la edad el impedir que una persona pueda ascender o continuar con su carrera administrativa y su estabilidad laboral, esta es la recomendación que además la Asambleísta María Augusta Calle está consiente. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, el articulo 11 numeral 2 de la constitución dice que: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos deberes y oportunidades y nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo etc, eso nos da la pauta para saber para también proponer desde mi caso que se elimine la frase sin que puedan ascender. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, elimínese la frase sin que puedan ascender porque es inconstitucional. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, compañeros y compañeras, hablamos aquí en la décima segunda, las servidoras y servidores públicos que hayan cumplido los 70 años de edad previa evaluación, podrán continuar prestando sus servicios en la institución, estamos hablando acá también dice las servidoras y los servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley,

cumpliendo 70 años de edad habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, yo creo que hasta allí podríamos manejar el tema pero aquí tenemos que hacer una reflexión compañeros y yo estaba haciendo un análisis pequeño, si habríamos un poco correlacionado con el tema de la ley del anciano, la Ley del Anciano determina que a partir de los 65 años la persona adulta mayor ya es considerado de la tercera edad, y yo creo que también biológicamente debemos hacer un análisis, estamos haciendo una ley para futuro, una ley proyectada hacia futuro, conocemos que nuestros antecesores han vivido 80 a 90 años y algo más, porque las condiciones naturales antiguas eran distintas, la alimentación era distinta a la actual, ni siquiera hay un término que hemos considerado un término de vida de un ser humano estará sobre, hay un índice que se estaría sobre los 60 o 65 años aproximadamente y que de ahí empezaremos ya al debacle, hay que considerar algunos aspectos también dentro de la situación humana y dentro de aquello, yo por eso había más bien pedido de que si es que esto está bien analizado, el tema de los 70 años de edad, el término tope o se podría todavía revisar o analizar para que sea los 65 años de edad que estaría un poco empatando con la Ley del Anciano que podríamos corregir en torno a aquello y en la parte de este mismo segundo inciso dice: independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados sin que puedan ascender, esta parte como que esta demás no estoy yo al menos en lo personal no estoy de acuerdo porque no correlaciona a nada y más bien estaríamos yéndonos a una situación inconstitucional, que estaríamos nosotros degradando o menospreciando la participación de las personas y eso en torno ya se me ocurrirá algo para poder aportar. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, compañeras y compañeros, en este artículo no es pertinente si nos acogemos a la Constitución porque el artículo 36 ya dice quienes se a los 65 años, pero en el 37 le garantiza a las personas adultas mayores el derecho al trabajo remunerado en función de sus capacidades, todo servidor público independientemente de su edad estará evaluado y si la evaluación que se hace a una persona, miren yo les voy a contar, acaban de hacer un proceso de evaluación al Seguro Social la mayor nota obtenida en el proceso de evaluación en el Seguro Campesino obtuvo un médico que tiene 71 años de edad nota mayor, yo creo que aquí tenemos que hablar con la Constitución en la mano por un lado, la Constitución garantiza el derecho al trabajo a todas las personas, segundo estamos hablando de que todos los servidores independientemente de que van a tener un proceso de evaluación y también el artículo 37 garantiza el trabajo a las personas de tercera edad, más aún cuando yo debo decir compañeros que aquí deberíamos justamente recogiendo las palabras de Carlos hacer esta ley con ojos de futuro, nosotros tenemos este rato una transformación de la pirámide poblacional en el Ecuador bastante seria, lo que era una pirámide poblacional sustentada fundamentalmente en niños y en población joven este rato ya tiene una variación importante que se la ha dado por una disminución en la tasa de natalidad, es 5.2 hijos por mujer que se tenía previsto que se tenía como índice del Ecuador hace 18 años este rato tenemos 3.1 y esa disminución en la tasa de natalidad es progresiva, en unos años más vamos a tener una población fundamentalmente mayor, vamos a tener que sostener lo que está pasando este rato en Europa, vamos a tener que sostener un Estado con población mayor y si es que esta ley prevé sacar a la gente mayor es complicado, realmente este rato esta variación de la pirámide poblacional también está haciendo que varía la edad ocupacional, yo creo que este artículo, yo propongo que debe ser eliminado porque es inconstitucional. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, ¿Todo el artículo?. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, todo el artículo, lo que se tiene que mantener es cuales van a ser las compensaciones por jubilación, o sea es decir las personas que desean jubilarse tienen derecho a tener las compensaciones anteriormente referidas pero creo que ya está tratado en un artículo anterior. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, lo que yo quisiera que en cualquiera de los dos lados si ya eliminamos este, reforcemos en el 142 lo que decía el Asambleísta García, resulta que

hay el caso de un señor que vendió su renuncia, su jubilación y le dijeron "presenta tu renuncia y te acoges a este monto compensatorio", presentó su renuncia y ahora le dicen que no hay el dinero porque primero debía negociar o verificar que el Ministerio de Finanzas tenga los recursos y una vez que constate que tenga los recursos presente la renuncia, que como ya la ha presentado primero ya no hay la compensación, el caso está aquí en la Comisión, entonces yo sí creo que hay de asegurar que el Ministerio de Finanzas preverá anualmente los recursos necesarios para esta compensación, donde ustedes le pongan asesores, si vamos a suprimir este pongan en el 142, pero que quede: el Ministerio obligatoriamente preverá en su presupuesto los recursos para esta compensación. Entonces se eliminaría toda. Interviene la Asambleísta Dora Aguirre, cuando María Augusta refería al artículo 36 de la Constitución, en la Constitución habla sobre las personas quienes eran consideradas personas adultas mayores, pero no en ningún aspecto dicen que dejarán de trabajar, que dejarán de ascender, o que dejarán de concursar, en ese caso por eso era la especificidad de este artículo donde efectivamente aquí se dice que se consideran personas mayores de 65 años, las personas mayores adultas cuando cumplan 65 años para efectos de pensión social básicamente y mayoritariamente, pero aquí había una preocupación y si ustedes recuerdan, que profesores de la Universidad Central que con edad mayor a 65 años nos trajeron esta propuesta, diciéndonos que se preveía que si se consideran personas adultas mayores de 65 años se preveía que se quería fijar la edad de jubilación en 65 años, ellos reindicaban el hecho de que podían seguir trabajando pasado los 65 años y que ellos mismo plantearon esa propuesta, de que previa evaluación continúen ejerciendo su trabajo, yo estoy de acuerdo que se quite esa evaluación porque es discriminatoria que no puedan ascender, pero que se mantenga el derecho de las personas que pasadas los 65 años puedan seguir trabajando porque de lo contrario precisamente vamos en contra de lo que nuestra población futura según lo hacía referencia María Augusta por la falta de natalidad va haber una necesidad básica de que las personas continúen trabajando y en este caso no es un interés político ni nada por el estilo, sino es una propia manifestación de las propias personas mayores, porque si nosotros valoramos y hacemos un taller con ellos, ellos reindican que quieren seguir trabajando, quieren seguir siendo útiles a la sociedad, en espacios donde ellos han estado trabajando o en otros espacios, por lo tanto yo no creo que se deba eliminar este artículo sino mas bien quizá reorganizar en función de las aportaciones que hacían cada uno de las compañeras asambleístas. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, completamente de acuerdo en la defensa de los derechos de los trabajadores, de las personas adultas mayores, de todos, si quisiera que también nos pongamos a pensar, no sé si ustedes han estado en los desfiles cívicos en los pueblos, parroquias, ciudades, hay cientos de miles de jóvenes y miles de bachilleres, miles de profesionales jóvenes ¿donde se van a emplear esos profesionales jóvenes?, solo esa reflexión, estamos pensando si efectivamente en los adultos mayores que sigan trabajando, porque mas bien no pensamos en una pensión digna y que esos espacios queden para miles de jóvenes profesionales que hoy andan con la carpeta bajo el brazo, compañeros no solo debemos pensar en determinados sectores poblacionales, pensemos en la totalidad del país a mi si me preocupa ver a cientos de miles de jóvenes de profesionales que no saben qué hacer, solo esa reflexión compañeros. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo creo que hay dos cosas compañeros, deberíamos dejar abierto no mandatorio que a la edad se retiren o no se retiren, porque si nosotros hacemos una buena Ley de Seguridad Social, seguramente muchos se van a retirar, yo estoy de acuerdo que los jóvenes pasan desocupados pero eso no significa que vamos a mandar a la gente a la jubilación con una pensión miserable, Asambleísta si hacemos una buena ley donde garanticemos una buena pensión de jubilación mucha gente se va a jubilar, sino se jubilan es por el terror a recibir esa pensión miserable, yo creo que no deberíamos ponerlo como obligatorio, sino dejar abierta la posibilidad de que más bien



puedan hacerlo cuando lo crean conveniente.

Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, respecto a lo que decía el Armando, eso se puede lograr con un estímulo, el estímulo es la buena jubilación pero no como una imposición en la edad de jubilación porque estaríamos yéndonos contra la constitución y la otra cosa es lo que decía la Nivea es impracticable que el Ministerio de Finanzas tenga un pasivo ahí para las posibles jubilaciones, sería una cantidad que cuanto dejan ahí guardadito para las posibles jubilaciones, eso es impracticable dentro de un presupuesto más de un Estado donde tenemos escasos de recursos entonces, yo creo que lo que se debe poner es un inciso donde se diga que la solicitud de jubilación tiene que ser atendida, dar la obligatoriedad a la institución a quien atienda la solicitud de jubilación como un derecho que tienen las personas para ejercer pero y respecto a cómo reorganizar esto recogiendo como lo que decía la Dorita, yo creo que aquí lo que tenemos que poner que la evaluación de gestión se llama no es cierto la evaluación de gestión pone como requisito para que una persona pueda continuar dentro del servicio público nada más no la edad. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, entonces redactemos de nuevo este artículo. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, este artículo se lo reformuló porque la propuesta al Ejecutivo era de que se ponga un tope y ese tope era retiro obligatorio, entonces en base a eso nosotros hemos ido reformulando, redactando de otra forma porque todas las disposiciones que aquí se recogen están desarrolladas a lo largo de toda la ley entonces no hace falta sinceramente. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, ¿de acuerdo con la eliminación?. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, yo estaría de acuerdo con eliminar, pero eliminarse como está pero rehacerlo, porque creo que es importante lo que decía la Dorita, si decir esto último que habíamos dicho la evaluación de gestión será el único requisito para la permanencia de un trabajador dentro del servicio público, la edad en caso de una evaluación no aceptable será pasados los 65 años de edad, no se procederá al despido del trabajador sino a su jubilación, es decir estamos diciendo de que cuando una persona de más de 65 años no responda positivamente a la evaluación de gestión, tendrá la opción de jubilarse, no de que le despidan para salvaguardar ese derecho no es cierto y el otro inciso sería que la decisión del servidor público de acogerse a la jubilación será de obligatorio cumplimiento por parte de la institución donde preste sus servicios. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, les ruego ir reestructurando el artículo me parece que es el consenso de que se lo ponga de una nueva forma. Interviene el Carlos Samaniego, compañeros, yo creo que el contenido que está actualmente, el artículo si nos deja muchas dudas y mucha incertidumbre, creo que tampoco deberíamos eliminarlo pero si como acababa de explicar María Augusta y Dorita, también incorporar estas inquietudes que tenemos, fortalecerlo a este artículo aquí en función de que debemos dejar si ya está dentro articulado en la parte pertinente a jubilaciones, ya dice las jubilaciones voluntarias a partir de tal edad y en tantos años de servicio entonces ya estamos y tenemos que manejarnos en secuencia de aquello, aquí lo que deberíamos un poco poner es en torno a que deberíamos nosotros, o el servidor público tendría opción a partir de los 65 años darle una garantía, si que no precisamente la evaluación pueda ser un objeto o un motivo para poder despedirlos en el supuesto no consentido. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, me parece que María Augusta decía que la evaluación y la Dorita será la única garantía para permanecer y la propuesta de la Asambleísta María Augusta es que no pongamos la evaluación. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, pero que esto no sea el motivo para que sea para un despido. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, eso va a contradecir con algo que pusimos antes, que habrá una escala de evaluación y que quien reincida de nuevo en una mala evaluación será destituido, será despedido, entonces verán bien porque allá decimos si saca insuficiente y vuelve a sacar insuficiente es despedido. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, porque si ya alguien llega a los 68 años de edad y por su evaluación tiene que ser

despedido imagínese, queda en indefensión estaríamos yéndonos contra ellos, aquí sería establecerle adecuadamente donde le protejamos a esa persona donde estaría ya en posibilidades o en condiciones de jubilarse a poco tiempo. Interviene el señor Secretario, Décima Tercera.- Las servidoras y servidores que cesen en funciones por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada o por remoción a partir del quinto año de servicio prestado en la misma institución, percibirán a más de la liquidación de haberes una compensación económica de acuerdo a las regulaciones y a los montos que para el efecto expida el Ministerio de Relaciones Laborales, previo al cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 144 de esta ley. Las servidoras y servidores que se retiren en cumplimiento de lo previsto en la disposición general décimo segunda de esta ley, percibirán una sola compensación que será la correspondiente a la de mayor valor entre las previstas en esta disposición y la décima segunda antes referida. Asesores sugerencia. Eliminar, o por remoción por afectar la estabilidad de los servidores de carrera la disposición no detallada sin servidor podrá o no regresar al sector público y de poder reingresar, no establece si deberá o no devolver este beneficio de compensación previo a su reingreso. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, ¿Si nos podría explicar por favor los asesores y la sugerencia?. Interviene el Dr. Carlos Paladines, señora Presidenta, Asambleístas de la comisión, la frase "o por remoción", permite que la autoridad nominadora sin causal pueda señalar a un servidor de carrera que está retirado que pierda su estabilidad, con lo cual se viola todo derecho a las defensas, va en contra de los derechos de la estabilidad del servidor y de la carrera administrativa, por lo tanto esa frase "o por remoción", puede ser declarada inconstitucional y recomendamos que se abra al debate al respecto. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, eliminada. Interviene el señor Secretario, se acoge sugerencia asesores. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, hay otra sugerencia de los asesores que también vale la pena leerla, dice: la disposición no detalla si el servidor podrá o no regresar al sector público; y, de poder reingresar no establece si deberá o no devolver este beneficio de compensación previa a su reingreso. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, queda sujeto a que revisemos, lo encontremos y de no encontrarla la ponemos. Interviene el señor Secretario, Décimo Cuarta.- Las instituciones del sector público están obligadas a implementar dentro de sus instalaciones la infraestructura física necesaria, que permite el fácil acceso y movilidad de las personas con discapacidades así como a priorizar su atención. No objeción a la Décima Cuarta. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo tengo que acoger lo que decía la asambleísta Kronfle no tenemos capacidades especiales porque no tenemos tres cabezas, cinco manos, somos con discapacidad, es muy importante valorar la percepción que ella tiene, ella reclamó en el Pleno, ella ha pedido que se llame personas con discapacidad, porque dice lo otro da otra interpretación, yo pienso que debemos respetar aquí realmente pues. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, en el Artículo 47 de la Constitución, Sección Sexta, Personas con discapacidad, así se habla en la constitución. Interviene el señor Secretario, Décimo Quinta.- Las instituciones del sector público sujetas al ámbito de esta ley y en el marco del proceso de reforma democrática del Estado deberán entrar en proceso de reestructuración institucional y remunerativa, definido sobre la base de sus competencias legales, su estructura orgánica, diseño de procesos internos, descripciones y perfiles de puestos, optimización y racionalización de recurso humano, las instituciones del sector público deberán implementar el modelo de evaluación de gestión institucional a través de la determinación de indicadores de gestión desde la perspectiva institucional, satisfacción de usuarios, procesos internos y desempeño individual del recurso humano. Asesores incluir el siguiente inciso: Para la aplicación de la presente disposición. Se aplicará lo establecido en la siguiente ley y la normativa que para el efecto establezca el Ministerio de Relaciones Laborales. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, no es competencia del Ministerio de Relaciones Laborales la reestructuración del Estado, el

único que puede hacer que está encargado de la reestructuración del estado es el Consejo de Planificación del Estado, que ahora está representado por el SEMPLADES, no podríamos ponerle al Ministerio de Relaciones Laborales en esa competencia, de lo que yo veo es que este artículo se refiere al proceso de modernización del Estado y no es el ámbito del Ministerio de Relaciones Laborales en la ley de modernización del Estado, hay el SEMPLADES quien es el que maneja toda la parte de reestructuración, no le encuentro sentido a este artículo dentro de esta ley la verdad. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, María Augusta que bueno tener personas así que tengan claridad, es muy peligroso, porque si dejamos así abierto todo el mundo irá así a la reestructuración del Estado y despedirá a los servidores. Interviene el Dr. Carlos Paladines, señora Presidenta, el término "reforma democrática del Estado", no es una materia contemplada en esta ley, asumo que es lo que se pretende señalar en este artículo es que como la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP va a establecer nuevas metodologías, nuevas formas y herramientas jurídicas para la administración pública, se pueda señalar que todas las instituciones iniciarán un proceso por actualizar su normativa conforme a los principios de la loseta, eso posiblemente es lo que se quiere señalar, sin embargo al señalarse reforma democrática del estado es un término que no es de la materia de la presente ley por lo tanto vale debatir su permanencia. Interviene la Asambleísta Dora Aguirre, la décima quinta creo que el tema central que plantea, el Ministerio de Relaciones Laborales es tener la facultad de organizar las competencias legales, la estructura orgánica, el diseño de procesos internos, descripciones y perfiles de puestos, optimización y racionalización del recurso humano, yo creo que eso si es necesario que se contemple dentro de este artículo desde luego omitiendo las primeras seis líneas dentro de esta transitoria y centrar básicamente en este contenido, que si le compete al Ministerio de Relaciones Laborales y que creo que es lo medular que quiere trasladar. Interviene el Asambleísta Kléver García, señora Presidenta, nosotros ya en esta ley hemos definido claramente las atribuciones y funciones del Ministerio de Relaciones Laborales, entonces sino en materia la Reforma democrática del Estado de esta ley mal hace estar esta décimo quinto a disposición general, señora presidenta por lo que yo solicito se anule. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, a partir de octubre del 2008 tenemos una nueva Constitución, sobre esa Constitución estamos elaborando una serie de leyes que permiten tener una nueva visión del Estado y una nueva forma de gestión del Estado, en muchas instituciones es necesario una reestructuración institucional o sea una optimización de recurso humano, una redefinición de perfiles, una redefinición de orgánicos funcionales y estructurales, si de pronto no dejamos esta disposición general décimo quinta a lo mejor que el Estado como tal, la institucional como tal, que ataba al interés particular de una persona, quiere decir yo soy secretario, soy contador general de lo que sea de aquí y a mí no me mueve nadie, entonces sin que se pierda el derecho adquirido a la estabilidad debe haber un margen en las entidades públicas de poder redefinir los perfiles, de poder redefinir las funciones a efectos de darles mayor agilidad, de darle mayor facilidad, una mayor eficacia, que justamente debemos garantizar de recordemos y eso insisto también esta es la Ley de Servicio Público, no es solo la ley de los servidores públicos, es decir a través de desarrollo normativo debemos garantizar los derechos de los trabajadores, no olvidemos que a través de esta ley también tenemos que garantizar un servicio de calidad, de eficiencia y de eficacia, yo digo de pronto estamos solo legislando para un sector y olvidando a los usuarios. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo creo que cuando hablamos de los traslados o presión de partidas pusimos que deben estar sujetos al plan nacional y todo lo demás, dejar esto abierto Asambleísta que es un riesgo todo lo que tenemos aquí en esta comisión, lo que pasa es que ya voy hacer que saquen un resumen para que ustedes analicen todo lo que tenemos en tema de supuestas reestructuraciones y despidos de cantidad de servidores y servidoras, nos deja la lección de que esto no debe quedar ahí yo creo que debe

eliminarse. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, el primer inciso hace referencia a la ley de modernización del Estado, es ahí donde se obliga y se dice ya es en esa ley en donde se dice que el Estado entra en un proceso de reestructuración, lo que dice en el primer inciso está contemplado en la Ley de Modernización, el segundo inciso es el desarrollo de toda la ley, toda la ley está hecha para justo ese inciso para decir que las instituciones del sector público deben implementar un modelo de evaluación de gestión, hemos dicho de que maneras tienen que implementar, que tienen que tener indicadores de gestión, que la satisfacción de los usuarios, que los procesos internos y desempeño individual de recursos humanos, o sea toda la ley está hecha para ver como aplicamos este segundo inciso, yo no le encuentro razón de que esté aquí. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, creo que es inoficioso y la decisión es eliminar. Interviene el señor Secretario, Décimo Quinta, se elimina el artículo. Décimo Sexta.- Otros beneficios de orden social podrán ser expedidos mediante resolución que emita el ministerio de Relaciones Laborales, previo dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas acorde a lo establecido en la letra c) del artículo 144 de esta ley. Codificar. Asesores incluir el siguiente inciso. Estos beneficios de orden social no podrán contravenir lo establecido en la disposición décimo séptima de la presente ley. Codificar. Interviene el Asambleísta Kléver García, analizado la disposición general décimo séptima y lo que establecen los asesores, también la décimo sexta es inoficiosa porque está prohibiendo todo la creación de rubros por el concepto que indique beneficios de carácter económico material, entonces no tiene razón de ser ya este artículo tampoco. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, tiene que quedar solo la décimo séptima. Interviene el señor Secretario, Décimo Sexta, eliminada. Décimo Séptima.- Prohíbese expresamente el restablecimiento o creación de rubros, conceptos que impliquen beneficios de carácter económico o material no contemplados en esta ley en lo relacionado a gastos de personal de cualquier naturaleza o bajo cualquier denominación, a excepción de los gastos por transporte, alimentación y uniformes, los que serán regulados por la norma que el Ministerio de Relaciones Laborales emita para el efecto. No objeción Décimo Séptima. Décimo octava.- Ninguna servidora o servidor de las instituciones contemplada en el artículo tres de esta ley podrán percibir utilidades en la entidad donde laboran. No objeción décimo octava. Décimo Novena.- Las instalaciones para fines de orden social, deportivo, recreación, capacitación y clubes de las instituciones del sector público, podrán ser utilizadas por servidoras o servidores de otras instituciones públicas, así como por personas que no pertenezcan a este sector cuyo uso será regulado por el Ministerio del Deporte. Se prohíbe de manera expresa la creación de nuevas instalaciones deportivas para las instituciones del sector público, se determina que a partir de la presente fecha las referidas instalaciones deportivas deberán ser traspasadas gratuitamente al Ministerio de Deporte, excepto aquellas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, las cuales por razones de seguridad nacional deberán mantenerse. La venta de las instalaciones referidas en esta disposición estará a cargo de la unidad de gestión inmobiliaria del sector público. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, compañeros, aquí dice: "las instalaciones para fines de orden social, deportivo, recreación, capacitación de las instituciones del sector público, podrán ser utilizados por servidoras o servidores de las instituciones públicas, así como por personas que no pertenezcan a este sector cuyo uso será regulado por el Ministerio del Deporte", no sé si aquí cabe una aclaración, ¿El Ministerio del Deporte regula las actividades o el uso de un establecimiento para actividad social?, no, ¿el Ministerio del Deporte regula de pronto una sala donde se dé para capacitaciones?, tampoco, entonces aquí yo creo que estamos herrando, por que debemos sacarle aquí la palabra deportivo, las instalaciones para fines de orden social le sacamos deportivo y recreación y esas deben ir mas bien abajo. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, esas deben ser reguladas por quien. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, es que esas no van a ser reguladas, esas son más bien dicho

administradas internamente por las organizaciones de las instituciones públicas, solamente en todo lo que tiene que ver por las instituciones públicas y recreativas deberán pasar al Ministerio del Deporte. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo creo que ahí si debe decir respeto, sujetándose al reglamento o algo porque si no, dejamos abierto vengo yo a ocupar la instalación. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, por la normativa, por la reglamentación de las iorganizaciones filiales a la institución pública a la que pertenece. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, no es ese el sentir, porque mire usted, yo tengo la Asociación de Profesores del Bernardo Valdiviezo, si le dejamos como usted dice yo solo, mi asociación rige, yo presto para esto, o no, ese no es el sentir, más bien el sentir es que se habrán a otras instituciones, leamos bien la idea, está bien lo deportivo que regule el Ministerio del Deporte perfecto, de acuerdo pero lo anterior veamos a quien le corresponde regular. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, yo creo que hay una mala interpretación de mi mensaje, mi mensaje es en que, la parte donde dice: deportivo recreación, no puede involucrarse dentro de lo que dice la parte social de orden cultural y estas cosas clubes no, aquí deberá regular la institución pública a la que pertenecen los servidores, aquí le aclaramos exactamente y solamente dejamos sin cerrar tampoco, sin cerrar la opción o la oportunidad que esto pueda ser partícipe de otras organizaciones o instituciones, aquí en la otra parte dice: "en el insisto segundo se prohíbe de manera expresa la creación de nuevas instalaciones deportivas para instituciones del sector público", perfecto, "se determina que a partir de la presente fecha las referidas instalaciones deportivas deberán ser traspasadas gratuitamente al Ministerio del Deporte excepto aquellas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional las cuales por razones de seguridad nacional deberán mantenerse", luego viene, " la venta de las instalaciones referidas en esta disposición", estamos contradiciéndonos, dice deberá pasar gratuitamente a que es la venta de las instalaciones referidas en esta disposición estará a cargo de la unidad de gestión inmobiliaria del sector público, pero si hacemos aquí un traspaso gratuito al Ministerio del Deporte. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, eso pasa por lo que usted señaló Asambleísta, hay un entrevero entre lo académico, lo deportivo, las instalaciones sociales, lo uno puede ser traspasado al Ministerio de Deporte, pero todo no pues imposible. Interviene el Asambleísta Kléver García, yo le doy el ejemplo señora Presidenta de las instalaciones del Banco Central, las instalaciones del Banco Central fueron hechas con el dinero del Estado en algunas ciudades del país, ellos eran miembros exclusivos de esas instalaciones deportivas, de esas instalaciones sociales, entonces en primera parte esta correcto que cualquier institución puede utilizar esas instalaciones y en el asunto deportivo también en la ley del deporte se preveo que se entregue también bajo inventario las instalaciones deportivas, las deportivas, solo deportivas para que ellas sean los que administren o le deleguen a las instituciones deportivas de menor jerarquía como, dígame instalaciones deportivas provinciales, asociaciones o federaciones deportivas y en la parte del último inciso, la venta de las instalaciones deportivas estarán a cargo del Estado, entonces eso a mi criterio tampoco esta correcto eso se debe suprimir lo que se dice la venta de las instalaciones referidas en esta disposición estarán a cargo en la unidad de gestión, porque las instalaciones deben mantenerse bajo el cuidado de las mismas instalaciones, que le normemos si correctamente pero tampoco no que se pretenda vender las estas instalaciones del Estado. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo creo que la intención es rehacerlo separando, lo que son instalaciones deportivas, de lo que son las otras instalaciones, las instalaciones deportivas pasan al Ministerio de Deportes se hace un traspaso, creo que esta es la idea, recreación y deportes, las instalaciones sociales, quien regula y aquí tenemos que establecer si se venden a través de una inmobiliaria o quedan en la institución, parece que por ahí es la cosa. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, este artículo tiene dos intenciones, la primera de que si hay instalaciones que son deportivas, sociales, culturales, no hay razón porque estas

instalaciones son del Estado, no hay razón para que una institución pública le mezquíné a los empleados y personal de otra institución pública que no tiene esa instalación, el objetivo de ese artículo es ese, si es que si hay una instalación que tenga dígame una entidad educativa, pero que requiere los empleados de un banco, el Banco Central, o del Banco de Fomento, o que requiera para sus actos o para hacer deportes, entonces que puedan tener acceso a esas instalaciones, eso es el objetivo del primer inciso, y el segundo inciso es de que el Estado puede estar invirtiendo por el hecho de que le mezquinen en un lado estar haciendo otro porque eso es plata que es de todos y que eso se llama un poco como dispendio a los recursos públicos ese es el si se quiere el objetivo del segundo inciso, o sea la primera es mejor dicho que las instalaciones que tiene para estas actividades recreacionales se entiende que es de todos, porque si le mezquinan una institución mezquina a otras siendo que es del mismo Estado con estas instalaciones resulta que se ven obligados los otros también a pedir que les hagan, es el propósito de este artículo en sus dos incisos, lo otro ya es como regulan, o sea quien se hace cargo, entonces aquí está diciendo que aquí se hace cargo de coordinar esta situación en el Ministerio de Deportes, en los términos que están planteados yo estoy de acuerdo, con el motivo justamente que persigue este artículo en sus dos incisos. Interviene la Asambleísta Dora Aguirre, un poco en la línea de que hacía el compañero Carlos Samaniego, porque estamos hablando de instalaciones de fines de orden social, recreacional, capacitación y clubes y al final del primer párrafo, habla que será regulado por el Ministerio del Deporte, entonces yo sí creo que es pertinente separar lo que son por ejemplo las instalaciones para fines de orden social, capacitación por ejemplo, creo que ya se mencionó aquí en la mesa se planteaba que lo regule la propia institución y todo lo que son instalaciones deportivas lo regule el Ministerio del Deporte y luego lógicamente incluyendo dentro del artículo que todas estas instalaciones de orden social, capacitación, recreacional, sean de uso de todos los servidores y servidoras públicas de cualquier institución. Asambleísta Carlos Samaniego, compañera Presidenta, yo solamente quiero hacer una ligera motivación y felicitarle al compañero Linder Altafuya, que ahora se está uniendo al proceso de la revolución ciudadana por que dijo que las canchas son de todos, entonces la Patria también es de todos, en torno a la décima novena disposición quiero insistir en que debemos singularizar, o separar, o independizar las instalaciones de lo que es orden social de capacitación, para clubes de la institución que estas deben seguir perteneciendo o administradas por la misma institución pública, pero aquí debe agregarse que deban tener el carácter de servicio social y comunitario, no solamente para la institución, porque eso es lo que tenemos que abrir el aspecto para eso, en torno a lo que es de orden deportivo y recreacional deberán ser a sí mismo con la característica de servicio social, comunitario y deberán entregarse esto al Ministerio del Deporte correspondiente para que sea administrado por el Ministerio del Deporte, eso es lo que yo plantearía compañeros en torno a aquello. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, lo que haríamos es una nueva redacción, yo no sé si para avanzar les encargamos a los compañeros asesores que han estado metidos en el tema nos ayuden con la redacción y luego la ponemos a consideración antes de terminar. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, yo estoy de acuerdo con que se mejore la redacción, pero en lo que tiene que ver a que son instalaciones netamente deportivas y que son instalaciones netamente sociales y culturales en eso discrepo, porque una instalación deportiva tranquilamente puede ser usada para un acto cultural, para un acto académico, para un acto social, entonces no hagamos ese tipo de diferencia porque ahí si nos vamos a confundir más, yo creo que debe dejar aclarado y debe quedar así aclarado de que las instalaciones deportivas deben estar coordinadas como está acá incluso por decreto de ley, por el Ministerio de Deportes. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, el uso que le demos a determinada área, no significa que esto también es de aquello por ejemplo, yo digo esta es una sala de sesiones, pero si yo hago aquí hoy una fiesta estamos dando otro uso, pero en cambio no

22

ha dejado de ser cancha deportiva sigue siendo cancha y una sala de capacitación es para capacitación y es para una actividad social que puede ser. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo creo que el destino es lo que tenemos que diferenciar, lo que son canchas pasan al Ministerio de Deportes y las áreas deportivas, si las usamos también en otra cosa, eso ya es diferente. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, cojamos el complejo del Banco Central, tú tienes una piscina maravillosa, unas canchas chéveres y el club deportivo el club social donde se hacen las fiestas, ahí mismo que es lo que pasa, es decir yo concuerdo con Línder, estas instalaciones recreacionales, sociales, deportivas, de squash, lo que sea han sido hechas uno yo creo que cuando hay duda que ir al principio, uno han sido hechas con plata del pueblo, por lo tanto no le pertenecen a los funcionarios si no le pertenece a la gente en eso estamos todos de acuerdo, pero también hay otra cosa cogiendo el mismo ejemplo del Banco Central, si es que no damos a que ese uso sea regulado, se destruye, o sea este rato vos tienes el complejo del Banco Central bien mantenido, vos tienes unas canchas de tenis, esas canchas tienen que ser utilizadas por los chicos que hagan tenis, que quieran aprender tenis, pero si le abrimos se destroza, ósea hay que preservar precisamente porque es plata del pueblo, eso es la una cosa. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, por ejemplo que pasa si el Banco Central tiene una sala de conferencias, ahí en el edificio del Banco Central, una sala de conferencias en el edificio, ¿esa sala conferencias también pasa al Ministerio de Deportes?, eso es lo que quiero que está claro. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, estamos diciendo las instalaciones para fines de orden social, deportivo, recreacional, capacitación y clubes, podríamos quitarle de capacitación para evitar eso y dejar el resto y clubes, porque en el mismo Banco Central en este mismo complejo se hacen muchas veces eventos de capacitación quitémosle eso, porque sino que es lo que va a pasar la asociación de empleados vos vas y le dices al Banco Central, necesito que vengán hacer un evento para jóvenes y te va a decir sabe que el área social lo estamos administrando nosotros y solamente el Ministerio de Deporte puede administrar las canchas, pero resulta que el área social o la de capacitación los chicos que van hacer deporte necesitan entrar a comer, quitemos capacitación para que no dé lugar a las salas internas. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, aún así es riesgoso porque a las áreas sociales, al club se puede decir es un área para la capacitar. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, leamos con detenimiento la décima novena dice: las instalaciones para fines de orden social, deportivo, recreación, o capacitación y clubes, de las instituciones del sector público podrán ser utilizadas por servidoras o servidores de otras instituciones públicas, así como personas que no pertenezcan a este sector, es decir si una por ejemplo la Contraloría, tiene un bello lugar de capacitación en la vía la mitad del mundo, pero de pronto lo utilizan ese sector de capacitación una vez cada tres meses, o sea está subutilizado, entonces cuando ahí podría todos los días estar siendo utilizado para procesos de capacitación de otros empleados del sector público, o de organizaciones sociales y es lo que debe estar todo si no que debe de haber una regularización y debería decir que no diga el Ministerio en el primer inciso el Ministerio de Deportes si no para cuyo uso será regulado en el reglamento general a la ley o será regulado por un reglamento dictado por la propia institución. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, no me han contestado con la sala de capacitación que está en el mismo décimo piso de la Contraloría, ¿esa también pasa al ministerio?. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, pasa al ministerio. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, eso me parece un disparate si la sala de capacitación esta en el décimo piso de la Contraloría ese mismo piso pasa al Ministerio de Deportes, pero si es que no aclaramos también vamos a correr ese riesgo, o le ponemos instalaciones que estén dentro de las instituciones, por la propia institución. Interviene la Asambleísta Consuelo Flores, señora Presidenta, espero los legisladores que tienen más conocimiento me lo aclaren, me lo absuelvan: dice se prohíbe de manera expresa la creación de nuevas instalaciones



deportivas para el sector público, se determina que a partir de la presente fecha las referidas instalaciones deportivas deberán ser trasladadas gratuitamente al Ministerio del Deporte, está aquí diciendo las instalaciones deportivas no está hablando del asunto de forma administrativa, o en forma de sala de sesiones, está hablando de asunto deportivo, o sea deportivo significa canchas deportivas donde se realiza el deporte, excepto dice, aquellas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pregunto yo aquí justifican las cuales por razones de seguridad nacional deberán mantenerse, pero pregunto yo ¿ellos acaso no reciben dinero del Estado? y porque se le hacen la excepción a ellos, a los de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, si hablamos de asuntos de seguridad, aquí se está haciendo dentro de la Policía Nacional, o dentro del GIR, para los alumnos de quintos y sextos años que los están llevando a las canchas de ellos a que hagan la pre militar, ya se está haciendo paso de uso de ese bien, si aquí ya nosotros les estamos dando este enfoque, significa que se puede coartar eso y se lo restringe, se le están coartando esta posibilidad que se dé, porque acuérdate que la ley la interpretamos cuando nos dé la gana, como nos da la gana y como queremos, y si ellos son parte del Estado que reciben un presupuesto, acuérdate como nos manejamos en antes con los gobiernos autónomos descentralizados, así mismo ellos reciben un presupuesto, no se les puede dejar afuera, se tienen que tomárselos en cuenta, porque si quieren hacer juegos deportivos o lo que sea, el pueblo que es parte del Estado le van a objetar a que lo hagan y la misma Constitución lo dice en el artículo 278 numeral 1) participar en todas las fases y espacio de gestión pública y de planificación de desarrollo nacional y local y en ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos de sus niveles y uno de los niveles también es el deportivo y en el numeral 2) dice: traducir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental y esto forma parte también de responsabilidad social porque es algo deportivo, tenemos que detallar bien este artículo para no perjudicar a nadie ni sin efecto responsabilidades a nadie tampoco. Interviene la Asambleísta Dora Aguirre, básicamente ratificar lo que ya habíamos expresado anteriormente en el sentido que es necesario que se especifique que las instituciones deportivas de recreación y clubes de las instituciones del sector público podrán ser utilizadas por servidores o servidoras de otras instituciones así como por personas que no pertenezcan a este sector garantizando la apertura de las instalaciones deportivas públicas a toda la ciudadanía, con respecto a las instalaciones para fines de orden social y capacitación, que se establezcan en esta misma disposición que deben estar reguladas por las propias instituciones, en donde estén ubicadas estas instalaciones de fines de orden social y de capacitación y por otra parte haciendo una reflexión sobre la aportación que hacía la Asambleísta Consuelo Flores en relación a la utilización de las canchas deportivas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, yo creo que esa excepción entendemos que está incluida por razones de seguridad nacional, pero que a su vez, sí que se considere que muchas veces propias instituciones de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, suscriben acuerdos particulares específicamente con instituciones de formación pública y esto sí debería integrarse dentro de este articulado, considerando la excepción pero que a su vez podrán ceder espacios previo a su suscripción de acuerdo con diferentes instituciones públicas, instituciones públicas de formación, instituciones educativas básicamente creo que debe incluir. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, de pronto no hemos comprendido porque es importante agotar para poder entender todos esta parte entorno a lo que la compañera Consuelo y Dorita también le hacían alusión en la parte que, excepto aquellas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional las cuales por razones de seguridad deberán mantenerse, pero esto hace referencia a que no se traspase al Ministerio de Deporte, pero aquí sí estas instalaciones pueden darse uso de servicio social, solamente aclararle ahí, es para la parte pertinente al traspaso, a la entrega al ministerio, a eso habla que se entregara gratuitamente al Ministerio del Deporte. Interviene la señora Presidenta de la

Comisión, están tomando todos en cuenta los asesores para poder redactar inmediatamente. Interviene el señor Secretario, Vigésima.- Las servidoras y servidores que exclusivamente integran el servicio de vigilancia aduanera de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por las características de su puesto, la naturaleza del trabajo y la seguridad de su integridad personal, podrán ser cambiados administrativamente a distintas unidades de la entidad en el territorio nacional y por períodos de acuerdo a las necesidades institucionales exceptuándose para este efecto de lo que disponen los artículos 41 y 43 de esta ley, codificada. Asesores esta disposición podría ser. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, estoy plenamente de acuerdo con lo que plantean los asesores en el alcance que ase respecto del artículo, este artículo no es que podría declararse constitucional, es inconstitucional, entonces en ese sentido lo que pasa es que hubo la intención en la primera discusión, en el sentido de cómo son de Aduana a veces son amenazados, por contrabandistas por narcos, etc, y que para salvaguardar su integridad, la vida habría que siempre estarlos cambiando, pero eso mismo viola expresa disposiciones de la Constitución por eso yo quiero plantear aquí al seno de la Comisión que eliminemos este artículo, tal como lo sugirieron los señores asesores en eso tienen razón. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, solamente que en el tema de la aduana yo estoy de acuerdo o si no que me queda la angustia de que, pasa con los trasposos cuando necesita la institución, por ejemplo la oficina de la aduana queda en el cantón Loja, pero el servicio efectivo de la aduana tiene que ser en Macará a tres horas de Loja, yo digo que pasa ahí, me pregunto eso también si estamos o sea demos una tengamos una actitud responsable estoy de acuerdo que se ha hecho y deshecho con ellos como ellos también algunos casos se han hecho y deshecho con la gente que pasa por la frontera, pero ¿cómo regulamos el asunto? para no tampoco poner una camisa de fuerza de que no se maneje adecuadamente. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, compañera presidenta, compañeros, quisiera volver a dar lectura del contenido de esta disposición vigésima: dice la servidoras y servidores que exclusivamente integran el servicio de vigilancia Aduanera de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por las características de su puesto, la naturaleza del trabajo y la seguridad de su integridad personal, podrán ser cambiados administrativamente a distintas unidades de la entidad en el territorio nacional y por períodos de acuerdo a las necesidades institucionales excepcionándose para este efecto a lo que disponen los artículos 41y 43 de esta ley, aquí se ha hecho un artículo exclusivamente para los servidores de vigilancia aduanera, que les estamos aquí a ellos poniendo en una posición inconstitucional, no es posible que nosotros vayamos violentar este principio; y a ellos lo explicaron hace un momento y creo que más bien yo propondría que esto se elimine, hay una forma de regulación que lo hará ya la institución misma mediante una reglamentación que deberá originarse dentro de aquello, porque la reglamentación no hacemos nosotros, la reglamentación la hacen las instituciones y también esto tenemos que tomar en cuenta que para esto hay una Ley de Aduanas, en la que ya nos da la orientación y las actividades que tienen que cumplírselas normativamente. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, no sé si ponemos algún artículo que se regirá a su propio reglamento no sé, pero créamelo que tenemos problema o sea, como están aquí podemos decirles cosas maravillosas y ellos podrán irse agradecidos, pero después lo que provocaremos es que deroguen y se queden sin nada, o sea que quede como está, más bien discutámoslo de manera que quede sin lesionar sus derechos, los derechos que tienen no sea sujeto este artículo de que lo deroguen, lo veten y que vuelvan a otra vez a su estado inicial y ahí si se violen sus derechos. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, la disposición transitoria que estamos analizando y como está en el texto se refiere al personal de vigilancia aduanera, entiendo que esto no abarca a los funcionarios administrativos, si no únicamente a los vigilantes aduaneros, entonces si no se pone de alguna manera una disposición que permita tener esta flexibilidad de ubicarles

W

administrativamente o de ser cambiados administrativamente con el mismo concepto razonamiento que tenemos respecto de este sector de funcionarios podrían también reclamar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y decir a nosotros no nos mueve nadie de este lugar porque tenemos derecho de estar al lado de nuestra familia, pensemos en las consecuencias que puede tener y como dice Nivea precisamente no se trata de quedar bien con los compañeros que están aquí, se trata de quedar bien con el país, así es que pensemos y reflexionemos. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, compañeros, yo creo que aquí deberíamos añadir algo, yo no creo que se debe eliminar esto porque estos funcionarios remplazan a la policía en la parte aduanera, entonces imagínense yo estoy en Quito y me trasladan a Sucumbíos, y digo no me quiero ir y presunto un recurso constitucional y no puedo ir, porque yo tengo el derecho de ser consultado para el traspaso, yo creo que aquí debería haber un inciso que diga que estos funcionarios entrarán cuando vayan hacer contratados tienen que tener la aceptación previa de las condiciones laborales de dicha institución, para poner un candado para que no puedan presentar recursos de apelación, porque si no estamos complicados, o sea no hay posibilidad de trasladarles, vos dices a ver necesitamos este rato reforzar la vigilancia en la frontera para el contrabando de gasolina, necesitamos que a estos 10 de aquí pasarles y ellos dicen no, es complicado pensemos también en la institución que tiene que vigilar las aduanas que son bien importantes. Interviene Asambleísta Carlos Samaniego, compañera presidenta, yo creo que en torno aquello debemos nosotros tomar en cuenta de que existe una ley de aduanas y deberíamos, es que esta ley debe reformarse también, tiene que modificarse y yo conozco que esta ley se va a modificar, se va a reformar y en torno aquello yo propondría que se ponga, las servidoras y los servidores porque estamos hablando servidore, las servidoras y los servidores que exclusivamente integran el servicio de vigilancia aduanera se regularán por la ley y reglamento de la ley de aduanas, para poder dejar en libertad y que ahí en esa ley y en ese reglamento se establezcan las condiciones. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, aquí no es dejar en libertad asambleísta, para eso se hace la ley para regular, imagínese usted que esquiváramos todas las leyes para dejar en libertad a todo mundo, yo quiero que se respeten los derechos de los servidores y servidoras de aduana estoy consciente de eso, pero como tienen una función especial como lo hicimos con la policía y el ejército habrá que dejar una salvedad que sin irrespetar sus derechos a lo mejor poner una parte siguiente un inciso siguiente se garantice que también pondrán en función de los intereses de la institución, ser removidos sin que su remoción sea por mas o menos tiempo incluso podemos poner eso, pero yo no sé si nosotros podamos firmemente decir no, a mí también me gustaría quedar bien con los compañeros que están aquí y decir póngales libremente, pero yo creo también que hay que tener un sentido de responsabilidad. Interviene el Asambleísta Línder Altafuya, considero que este artículo debe ser eliminado por lo siguiente, hay preceptos constitucionales uno de ellos a igual trabajo igual remuneración, este es un personal son servidores públicos como son la policía, como son el ejército, etc. Entonces deben recibir el mismo tratamiento que recibe la policía, que recibe el ejército y que son un personal militarizado por las funciones que les toca desempeñar, ellos no son personal igual que el resto de los servidores públicos, es un personal especial, entonces la forma que ellos alegan tienen razón, en el sentido de que se están violentando principios que consagra la Constitución. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, Asambleísta le hago una pregunta y si ponemos excepciones a la policía, el ejército y la Corporación Aduanera. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, eso es lo que yo digo, que no hay razón para que ellos estén contemplados por la Ley de Servicio Público, no hay razón, por eso digo que tienen que ser eliminado este artículo que está planteado aquí, ellos son servidores públicos, pero requieren un tratamiento especial, ellos tienen su propia ley, que es la ley de Corporación Aduanera Ecuatoriana, es un órgano especializado, la Ley de Servicio de Vigilancia Aduanera y que

además tienen su reglamento, reglamento orgánico funcional y de administración de personal igual que sucede con la Policía, igual que sucede con las Fuerzas Armadas que tienen su propia ley y tienen su propio reglamento que rige en todos sus aspectos, a si mismo debe considerárselos a ellos, por ende no deben ser parte como está planteado aquí, me refiero en este artículo, por eso que este artículo debe ser suprimido esta general vigésima. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, yo quisiera decir, sé que esto no me hace absolutamente amigable, con los compañeros de la Corporación Aduanera Nacional, pero hay que hacer una diferencia, las Fuerza Armadas y la Policía Nacional por Constitución tienen derecho a sus leyes especiales, constitucionalmente, exacto constitucionalmente, la Corporación Aduanera Nacional no, si es que nosotros en esta ley empezamos a hablar de las excepciones de cada uno de los grupos porque tienen su propia ley, no tiene sentido la ley que estamos haciendo, yo entiendo lo que significa que les puedan trasladar a los compañeros, pero esas son las condiciones de esa función, eso es lo que tenemos es el marco constitucional que tenemos, no podemos ponerles a ellos junto con las Fuerzas Armadas y la Policía porque ellos constitucionalmente no tienen no están amparados para tener una excepción de esta naturaleza, un error de la Constitución es un error, pero nosotros no podemos reformar la Constitución. Interviene el Asambleísta Línder Altafuya, primero lo que dice el artículo que está planteado en este proyecto: Vigésimo.- Las servidoras servidores que exclusivamente integran el servicio de Vigilancia Aduanera, por las características de su puesto, la naturaleza del trabajo y la seguridad de su integridad personal, podrán ser cambiadas administrativamente a distintas unidades de la entidad en el territorio nacional y por periodos de acuerdo a las necesidades institucionales excepcionándose para este efecto de lo que disponen los artículos 41 y 43 de esta ley, o sea prácticamente les mutila sus derechos, miren está diciendo que son igual a las Fuerzas Armadas, o sea que son igual a las Fuerzas Armadas, igual a la Policía, que por su propia función deben ser trasladados, pero en cambio como ellos tienen su reglamento, como tienen su ley tienen compensaciones, tienen consideraciones que se les hace, en cambio acá se les hace se les da el mismo tratamiento que la Policía, el mismo tratamiento que las Fuerzas Armadas, para sus cambios, pero en cambio no tienen como compensación lo que tienen la Policía y las Fuerzas Armadas, entonces eso es lo que este artículo si es que los incluimos aquí en esta ley, esto es lo que este artículo tiene que enmendar y esto es el planteamiento que les doy señores asesores para que lo consideren, porque de ahí el planteamiento hecho por los señores de la aduana está fundamentado en lo que dice la Constitución y la ley, esto es lo que debemos nosotros superar, sí por su propio trabajo deben haber estos cambios pero que tengan el mismo tratamiento en los cambios que se les hace a la Policía, a las Fuerza Armadas, con la misma compensación con la misma correspondencia, a eso es a lo que yo me refiero. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, yo comparto con él, o sea si es que ellos tienen que ser trasladados y tienen que obedecer el traslado, eso es la naturaleza de su trabajo, pero también estoy de acuerdo que tienen que tener también alguna compensación sea igual que la Policía, eso creo yo que podríamos encargar una exposición específica al Ministerio de Relaciones Laborales que haga, regule eso, que se regule también todos los derechos que por este tratamiento especial tienen los compañeros del Servicio de Vigilancia Aduanera mediante un reglamento. Interviene el Dr. Carlos Paladines, la propuesta es que, de acuerdo a la constitución existe un ente rector, en este caso, en esta ley se ha señalado que es el Ministerio de Relaciones Laborales, por lo tanto con la finalidad de no obstruir la administración pública, en casos específicos como los que se está tratando este momento, pude emitirse una norma técnica por parte del Ministerio de Relaciones Laborales en el que se establezcan las situaciones que se están analizando. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, el que respetando o garantizando los derechos se establezca tal cosa podría ser. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, ompañera

Presidenta, sobre este mismo tema, yo solo quisiera pedir de manera especial que el señor secretario de lectura a lo dispuesto en el artículo 41 y 43 de esta codificación. Interviene el señor Secretario, Artículo 41. Del traspaso de puestos a otras unidades administrativas o instituciones, está suspendido, Artículo 43. Aceptación previa, el traslado, traspaso o cambio administrativo a un lugar distinto del domicilio civil de la servidora o servidor público, se podrán hacer solo con su aceptación por escrito. Interviene el Asambleísta Carlos Samaniego, en torno a esto yo creo que no empecemos a debatir más, yo pienso de que hay que regular el control también de que los servidores públicos, pero podría proponer yo que se elimine la parte que dice: Exceptuándose para este efecto lo que dispone el artículo 41 y 43, en este caso el 43 con eso creo que, regularíamos un poco y mantendríamos el tema del control por el Ministerio de Relaciones Laborales, como ente regulador y con eso eliminamos eso y creo que con eso estaríamos en mejores condiciones para poder aprobar esto. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, yo tengo aquí ya que estamos tratando este tema de los servidores de la Corporación Aduanera Nacional, yo tengo aquí una propuesta para la mesa para incluir otra disposición general que tiene relación con el mismo tema y es el que se relaciona con la Fuerza Armadas y la Policía Nacional, como yo me había comprometido con la mesa, yo trabajé con el Comando Conjunto con lo tenga que ver con las Fuerzas Armadas, si tenemos esta disposición general que se sustenta con una inclusión de un inciso en el ámbito y que tiene relación con el artículo 114 y el 92, pero en este tema específico, la disposición general sería: "Las servidoras y servidores en servicio activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se regirán por la escala de remuneraciones mensuales unificadas de la ley orgánica del servicio público, sin embargo, por no recibir valores económicos adicionales por los conceptos previstos en esta ley, tendrán derecho a percibir como compensación el valor que técnicamente corresponda para cuyo efecto el Ministerio de Relaciones Laborales emitirán la respectiva resolución", esto nos ayuda a que las Fuerzas Armadas entran dentro de esta ley, se someten a esta ley, pero bajo una regulación especial que la hará el Ministerio de Relaciones Laborales. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, la sugerencia sería ¿que sea el mismo tratamiento?. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, No esta sería, lamentablemente la Constitución no contempla a los compañeros del Servicio de Vigilancia Aduanera, si contempla a la Fuerza Armadas y Policías, hay esta moción de disposición general que yo presento ahora para las Fuerzas Armadas y Policías, esta misma aplicación que ya la constitución nos da, la constitución nos ampara a las Fuerzas Armadas y Policía, pero podríamos pedir algo similar pero que lo haga el ente regulador que es el Ministerio de Relaciones Laborales, pero también tendríamos que introducir esta disposición general de las Fuerzas Armadas. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, se elimina la moción, yo creo que por ahí vamos a salir con lo de ustedes. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, lo que podemos introducir es esta disposición general y ya después en la segunda revisión que estamos haciendo, yo les compartiría a ustedes la propuesta de ámbito, donde estamos hablando ya específicamente sobre el tema de remuneraciones. Interviene el señor Secretario, Vigésima Primera.- En aplicación de lo establecido en el mandato constitucional No. 8, se prohíbe toda forma de precarización, como la indemnización laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de las instituciones, organismos y empresas del Estado o cualquiera otra que afecte los derechos de las servidoras y servidores. No objeción. Vigésima segunda.- La servidora o servidor que permita el ingreso o ascenso de personas en el servicio público sin que haya efectuado el respectivo concurso de méritos y oposición, o que habiendo sido advertido por la autoridad competente, los ubique remunerativamente en un grado que no corresponde, omitiendo las normas técnicas para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales, así como la autoridad nominadora que en conocimiento de uno de estos hechos omitiere tomar las acciones correctivas pertinentes incurrirán en

responsabilidades administrativas civiles y penales sin perjuicio de otras acciones que el organismo contralor determine, la responsabilidad civil por el daño patrimonial que se cause a la institución implica también la devolución de lo indebidamente pagado en forma solidaria entre la unidad nominadora y el beneficiario. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, quiero hacer un alcance a la disposición general anterior a la vigésima primera, respecto de la aplicación de lo establecido en el mandato constitucional, yo creo que debemos agregar un inciso que sea una medida coercitiva para los funcionarios que no cumplan con esta disposición y esa medida coercitiva debería ser la destitución del funcionario público que continúe intermediando o precarizando las relaciones de trabajo, debemos incluir un inciso que obligue al cumplimiento del mandato constituyente. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, me parece bien, que se incluya el inciso. Interviene el señor Secretario, Vigésima Segunda no objeción. Vigésima Tercera.- Se establece que los regalos y presentes que tengan un valor económico representativo, recibidos por la condición de dignatarios o autoridades del país, deberán permanecer en las respectivas entidades o instituciones en las que pertenezcan y excepcionalmente calificados por la correspondiente autoridad podrán ser subastados y el monto depositado en la cuenta única del Estado o en la respectiva cuenta de la entidad autónoma descentralizada. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, dice: "Se establece que los regalos y presentes que tengan un valor económico representativo, recibidos por la condición de dignatarios o autoridades del país, deberán permanecer en las respectivas entidades o instituciones en las que pertenezcan y excepcionalmente calificados por la correspondiente autoridad podrán ser subastados y el monto depositado en la cuenta única del Estado o en la respectiva cuenta de la entidad autónoma descentralizada.", esto es bien delicado porque hay la potestad del Gobierno de decidir sobre que bienes pasan a ser de todo el pueblo, que pasaría si es que se dan los pretextos para vender todos los regalos recibidos hasta la fecha por ejemplo, y bajo qué criterio se lo realizaría. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, porque también cuando dice "un valor económico representativo", ¿cuál es el representativo?, hay una observación del Presidente Cordero y también dice Morales, Mendoza, Chico, el concepto de representativo es muy subjetivo, tendríamos que poner valor económico equivalente a uno, dos, tres salarios. Interviene el asesor Federico Medina, lo que pasa, imagínese la mayoría de los regalos que tiene el Gobierno Ecuatoriano son invaluable, o sea un regalo que lo otorgó de la Dinastía Chin que trajo que trajo el Gobierno Chino o cualquier regalo, bajo que disposición acuérdense ustedes que la persona que esté mandatario en ese momento, también va controlar el instituto de patrimonio, por lo tanto podría ingeniar cualquier escenario para vender, y podrían vender absolutamente todos los regalos recibidos, lo peor es que no existe nunca una justificación, nunca vas a tener ningún informe técnico que pueda avalar la venta o no, porque el día de hoy podría no serlo tenemos déficit fiscal, nunca vamos a tener el presupuesto acorde con las necesidades del país entonces cualquier presidente podría llegar y el manejo de ese dinero, una vez que ya se efectúa la transacción, o sea la venta tu ya vendiste cuando recuperaría imagínense que estamos ante litigio internacional antes instancia. Interviene el Dr. Carlos Paladines, señora Presidenta, o puede darse la vuelta al artículo y señalarse que todos estos regalos, constituyen patrimonio cultural del Ecuador y por lo tanto se prohíbe su enajenación, puede darse la vuelta al artículo. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, no lo topemos porque digamos que no exista, me parece que puede ponerse lo que tú has propuesto, pero a lo mejor en otra Ley de Bienes del Sector Público, pero no, aquí entonces elimine. Interviene el señor Secretario, Vigésima Tercera, eliminada. Vigésima Cuarta.- Para la aplicación de la presente ley y su reglamento, téngase como tal los siguientes conceptos: Dignataria, dignatario.- es la persona elegida por votación. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, donde consultaron porque no vamos a discutir si es un concepto que lo copiaron, que sacamos discutiéndolo aquí, es copiado lo sacaron de un diccionario.

Interviene el señor Secretario, Vigésima Cuarta, no objeción. Vigésima Quinta.- Cualquier servidor o servidora que se encuentre dentro de un proceso de esclarecimiento sobre los delitos de acoso o agresión deberán recibir acompañamiento psicológico durante la resolución del mismo. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, ¿Quien le otorga el acompañamiento que es psicológico?, lo que pone Rivera me parece bien, proporcionado por la entidad correspondiente, sí, yo creo que hay que concretar, acoger la propuesta del asambleísta River. Interviene el señor Secreatrio, e acepta observación de asambleísta Rivera. Vigésimo Sexta.- Asesores Vigésimo Sexta, ante el inicio de una indagación previa o de una acción penal que tenga como causa el ejercicio de sus funciones, la máxima autoridad de la entidad correspondiente podrá disponer que esta asuma el patrocinio del servidor público procesado o enjuiciado a través de los abogados de la institución siempre y cuando la acción no haya sido iniciada por la propia institución o por delito flagrante, sin embargo dicho patrocinio deberá cesar cuando se dicte prisión preventiva o auto de llamamiento a juicio en contra del servidor público. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, Para los asambleístas de que participaron del evento en Cuenca, recordarán que este fue un planteamiento de los servidores en el evento de Cuenca, entonces a mí me gustaría que se pronuncien sobre ese. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, estoy de acuerdo pero solamente hago una pregunta para que esto pueda ser absolutamente aplicable, porque esta es necesaria esta norma, ya existe la Procuraduría General del Estado, ¿cómo empatamos con la procuraduría?. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, la Procuraduría General del Estado no es más que el abogado del Estado para la defensa de los derechos Institucionales, o sea de los derechos que se quieren quebrantar de la Institución como tal, o sea de la ficción jurídica institucional, acá estamos hablando de el funcionario público, que es completamente diferente a los de lo institucional, un funcionario público que por lo general en el ejercicio de su función de pronto puede ser enjuiciado penalmente entonces, a más de asumir el costo de su defensa tiene el problema de continuar ejerciendo su función, entonces ahí esta disposición se refiere única y exclusivamente a aquellos procesos que se hayan instaurado o se instauren en el cumplimiento de sus funciones, pero es de carácter personal. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, de acuerdo con lo que dice Armando, pero ahí no tiene sentido el segundo inciso, hay que sacarlo, sin embargo hecho patrocinio, se hará cundo dicte prisión preventiva o auto de llamamiento a juicio en contra del servidor público, no, o sea le acusan a la enfermera por haber hecho una denuncia, le dicen de calumnia, el Ministerio de Salud Pública, asume el patrocinio de su defensa, pero deberá cesar cuando se dicte prisión preventiva. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, suprimase el segundo inciso. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, si ustedes revisan el proyecto en la última parta del primer inciso, y cuando la acción no haya sido iniciada por la propia institución o por delito flagrante, hay que hacer la relación, de pronto sí está de corregir lo que dice el asambleísta Mara Augusta Calle, se refiere a que sin embargo de dicho patrocinio deberá cesar cuando se dicte prisión preventiva o auto de llamamiento, digamos que el caso fuera en un hecho que el acusado sea un servidor del Ministerio de Economía y quien esta llevando la acusación en este caso sea el propio ministerio. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, ahí no hay defensa de la institución, aquí esta clarito, cuando por el ejercicio de su función, por ejemplo a mí me dicen el ejercicio de mi función, yo digo el estado debe la deuda, no están bien las inversiones el señor Ramiro González, dice la señora sabe de papas y melones creo que es lo que dice, entonces eso es en el ejercicio de mi función , pero si yo me armo un bochinche y me llevo la plata de la asamblea no me va a defender la propia Asamblea. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, Esto tiene que ver mucho por ejemplo, con lo que pasa muchísimo con el personal de salud, por ejemplo en los pueblos pequeños, en Cañar por ejemplo cuando estuvimos en Cuenca nos decían varia gente, que las enfermeras tienen la obligación de presentar una denuncia cuando hay violencia



intrafamiliar, o violencia sexual cuando llegan pacientes afectados por violencia intrafamiliar o violencia sexual tiene la obligación de presentar la denuncia ante la comisaria de la mujer, lo que pasa es que la señoras luego se hacen de a buenas con el marido, y juntos le presentan una demanda a la enfermera por calumnia, ahí es cuando el propio ministerio es el que tiene que asumir la defensa de su funcionario, porque estuvo cumpliendo sus funciones, entonces el ministerio le defiende pero hasta ahí, pero si es que a la misma enfermera es denunciada por haber robado veinte mil dosis de vacuna por el propio ministerio no es el que le va a defender pues, eso no tiene sentido el segundo inciso.

Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, en lo que tiene que ver este artículo, tienen que tener mucho cuidado los asesores para sacarlo bien, para redactarlo bien, porque cuando se trata por ejemplo de un juicio que se inicia por denuncia o por acusación de la propia institución, queda claro que ahí no tiene nada que ver la institución para defender, porque se ve un contrasentido, pero lo demás el artículo parte de la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia, eso está contemplada en la Constitución como un principio constitucional, todo mundo es inocente hasta que no se le comprueba su culpabilidad, yo creo que cuando se refiere al hecho de la orden de prisión es cuando ya pasa una etapa, donde ya le fijan al encausado ya le fijan responsabilidades, o sea que tienes responsabilidad hasta ahí llega la defensa de la institución, si a alguien por ejemplo lo están acusando de asesinato o lo están acusando de una violación o de un acoso, entonces partiendo de que es inocente la institución lo defiende, porque parte también parte del hecho de que él no tiene como pagar para defenderse, ya que solamente tiene su sueldo, y si es algo que está relacionado, dígame por una situación de vendetta política, que se da, pero en el momento en que ya el juez ya ordena, porque usted sabe que la medida cautelar más alta, más complicada que se toma ya es en última instancia, ya cuando hay parámetros de convicción, entonces ahí, se da la prisión como la medida, mas porque incluso ahorita lo prohíbe la constitución, hacer uso y desuso de la prisión, entonces ahí ya, todavía no sale la sentencia todavía no hay sentencia pero ya si el juez ya ordena la prisión de esa persona es porque ya hay indicios de que hay responsabilidad, hasta ahí llega el apoyo y la defensa de la institución. Interviene el Dr. Aldo Auquilla, Asesor de la Asambleísta Dora Aguirre, señores Asambleístas, la intención como bien dice el Asambleísta Linder Altafuya es objetiva, en el sentido de que la protección que se le brinda al servidor público es obvio cuando existe la presunción, pero en el sistema procesal ecuatoriano, por ejemplo la prisión preventiva que es una décimo tercera acción preventiva que se la puede lógicamente es cuando tanto el fiscal y el juez de garantías penales, encuentran indicios efectivos de que aparentemente el imputado, el acusado participó en ese delito, entonces ahí es necesario que ya el estado, ya no esté protegiendo a un presunto culpable. Interviene el señor Secretario, Disposiciones transitorias. Disposición Transitoria Primera.- A partir de la excepción de la resolución del ministerio del Ministerio de Relaciones Laborales, que se publicarán en el registro oficial que contenga la escala nacional de remuneraciones mensuales unificadas, quedaran sin efecto toda las escalas de remuneraciones, salarios o ingresos en general que hasta esa fecha hayan regido, para la determinación de la remuneraciones de los servidores de las entidades, instituciones y organismos contemplados en el artículo 3 de esta ley, en todo caso los procesos de supresión de puestos, no podrán superar anualmente en un punto porcentual a la población económicamente activa PEA, que presta sus servicios en las instituciones del Estado, las entidades y organismos de control, que transitoriamente no apliquen la unificación salarial, se someterán por estar sujetos al artículo 106 de esta ley, a la escala salarial que expide el Presidente de la República mediante resolución del Ministerio de Relaciones Laborales y no podrán aprovechar la transitoriedad para incrementos de remuneraciones o establecimiento de nuevas o más altas bonificaciones. Asesores: El segundo inciso no tiene relación con el presente artículo, el tercer inciso ya

31

no tiene aplicación por cuanto desde el año 2003 ya se encuentra con la unificación salarial en plena vigencia, agregar las siguientes disposiciones transitorias. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, creo que tienen sentido las sugerencias que nos hacen los asesores, el segundo inciso en realidad no tiene que ver con este artículo, y en el tercer inciso ya no tiene aplicación. Interviene el señor Secretario, se acogen las observaciones. Agregar las siguientes Disposiciones Transitorias. Segunda.- Si una vez producida la unificación de los ingresos de los dignatarios autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de las entidades y organismos previstos en el artículo 101 de esta ley, sus remuneraciones unificadas fueren inferiores a las determinadas en grado o categoría que le corresponda en las escalas nacionales de remuneraciones mensuales unificada, la homologación se efectuará a partir de la promulgación de esta ley de acuerdo al plan técnico y económico de mediano plazo preparado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual deberá encontrarse debidamente financiado en el presupuesto general del Estado. Rivera, Asesores sugerencia: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el plazo de un año desde la publicación de la presente ley mediante ordenanza fundamentada en su real capacidad económica determinada por su presupuesto del ejercicio económico del año en curso, aprobarán los términos y plazos de sus procesos de homologación salarial. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, ¿Cómo quedaron con este artículo con los servidores y trabajadores?. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, este artículo tiene relación con el artículo 114, lamentablemente en este artículo no pudo haber un consenso con los representantes de AME Y CONCOPE y los servidores de la Confederación de Servidores, quienes hacen AME y CONCOPE proponen en el 114 que los gobiernos autónomos mediante ordenanzas fijaran sus propias escalas remunerativas, las que se sujetaran a la real capacidad económica determinada por los presupuestos del ejercicio económico del año en curso, dichas escalas no excederán de los techos establecidos del Ministerio de Relaciones Laborales para las y los servidores públicos eso AME y CONCOPE, en la discusión aceptaban en referencia a los servidores de la confederación pero que se incluya el tema pisos, en eso sinceramente se atrancó la discusión y no pudimos obtener que se ceda por parte de AME y CONCOPE el tema piso, entonces está en la matriz, sin pisos se está proponiendo, pero respetando el tema de techos como había acabado de leer. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, yo creo que los gobiernos autónomos descentralizados no son entidades técnicas para establecer escalas remunerativas, yo creo que la propia Constitución en el 229 establece que hay un solo organismo rector, no podemos dejar que doscientos veinte y uno municipios cada uno tenga su propio régimen de escalas y remuneraciones, entonces eso es inconcebible, técnicamente no es adecuado ni equitativo, yo creo que sobre todo este último inciso debe ser eliminado, así como también el 114, redefinirlo de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, lo que habíamos conversado pues es un tema bastante conflictivo, evidentemente, si es que se llega a dar el tema de pisos, en algunos municipios que por ejemplo están ganando el servidor 220 dólares es muy difícil que de un momento a otro desde que sea publicada la ley, entren a ganar 450 dólares, que es más o menos el piso, es necesario dar un plazo para que los gobiernos autónomos descentralizados vayan a un proceso de homologación que permita por lo menos ir poco a poco llegando a ese piso, sinceramente es un poco difícil que de la noche a la mañana pueden llegar a los pisos por el tema de presupuesto. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo diría inclusive un año es muy poco hasta para que se llegue al piso, porque les coge la ley a los gobiernos autónomos de una, los que han estado enseñados, no quiero que lo tomen en el mal sentido de la palabra, han estado acostumbrados a poner pisos bien bajos, entonces si les ponemos un año probablemente no se generen los recursos para el año siguiente. Interviene el Dr. Carlos Paladines, Asesor de la Asambleísta María Augusta Calle, señora Asambleísta, en pleno conocimiento de la

realidad de los gobiernos seccionales y del espíritu de la norma, el no incluir el piso en primer lugar y luego no aceptar la homologación puede llevar a una consecuencia segunda, que nosotros legislemos la posibilidad de que los gobiernos seccionales establezcan su propio sistema de clasificación, su propio sistema de homologación, su propio sistema remunerativo, lo cual puede llegar a dar a que tengamos servidores municipales de provincias pequeñas de una calidad y servidores municipales o provinciales de ciudades como Quito o de provincia de Pichincha de una calidad superior, por lo tanto yo permito recomendar que se mantenga el piso, que con el piso en primer lugar estamos asegurando que no hayan servidores de primera y de segunda, es decir que se mantengan todos de una misma calidad, pero que también se mantenga la homologación porque es un mecanismo por el cual ya sea en cinco años o en termino similar, puedan los gobiernos seccionales presupuestariamente irse acomodando a la realidad jurídica que se está señalando. En el año 2003, a nivel nacional se hizo la unificación y se inicio un proceso de homologación que duro siete años para que hoy la mayoría de instituciones estén ya aplicando la normativa de una manera general, entonces bien podría establecerse un periodo perentorio de unos tres a cinco años para que los gobiernos seccionales vayan llegando a estar igual que todo el servicio público, de tres a cinco años o incluso se puede dejar que el periodo sea señalado. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, creo que tenemos que hacerlo verán con bastante inteligencia, cada cuatro años hay cambio de alcalde entonces, claro, yo recibo ahorita y me quedo para que venga el otro a solucionar el problema, dejo metiendo inclusive más gente para que el otro, no sé, tenemos que pensarlo, yo creo que está bien para que sea un periodo intermedio los tres años dos es muy poco, créanmelo que es muy poco, los municipios pagan sueldos de doscientos y pico y van a tener que duplicar y triplicar y hacer una clasificación grande entonces, cuatro no porque coincide con el fin de periodo entonces viene el otro nuevo a cagar el peso. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, nosotros también la mostramos la que trabajamos y se saca la copia que hace referencia a AME y los servidores municipales. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, tiene que ser la homologación progresiva, no es que le dejan al que viene para que la haga si no progresiva, el primer año tanto por ciento de personal, el segundo tanto por ciento el tercero tanto, que lo grave sería lanzarles de una sola o también no decir progresivo. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, señora Presidenta, como está elaborado, los gobiernos autónomos en el 114 los gobiernos autónomos descentralizados mediante ordenanzas, fijaran sus propias escalas remunerativas las que se sujetaran a la real capacidad económica, determinada por sus presupuestos del ejercicio económico del año en curso dichas escalas no excederán los techos y no serán inferiores a los pisos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales para las y los servidores públicos. Esta es la que se ha elaborado, la que nos propusieron por parte de AME Y CONCOPE el día de ayer, es la que voy a dar a continuación: en el segundo inciso del mismo artículo 114.- Los gobiernos autónomos descentralizados mediante ordenanzas fijarán sus propias escalas remunerativas, las que se sujetaran a la real capacidad económica determinada por sus presupuestos del ejercicio económico del año en curso, dichas escalas no excederán los techos establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales para las y los servidores públicos, repito esto presentado por parte de AME Y CONCOPE y en la observación que nos hicieron los servidores de la confederación de servidores municipales ellos están de acuerdo en el texto del inciso pero que se incluya el tema pisos, esa es la discusión señores asambleístas. Interviene el Dr. Carlos Paladines, Asesor de la Asamneleísta María Augusta Calle, señora Presidenta ya que estamos tratando el tema de gobiernos seccionales es importante señalar que en el artículo 67 respectivo a la clasificación se señala que hay un excepción para los gobiernos seccionales en el sistema de clasificación de esta ley, lo cual permitirá lógicamente que se transgreda el espíritu la conversación que se está señalando, es una clasificación para ámbito nacional no con

33

dedicatorias para unos adentro y otros no. Interviene el Asesor Federico Medina, a lo que refiere la acotación de el compañero Carlos, es que el sistema o sea no podemos confundir lo que es un clasificación de puestos o sea nadie puede decir a una institución a ninguna que P5 que P4 que cantidad de abogados puedan necesitar, pero la estructura para una institución está avalado o sea todos los gobiernos autónomos descentralizados deben tener una estructura que en algunos sea mayor, menor, acorde con la realidad pero ellos no van a poder crearse un puesto, imagínese que ahorita la escala es de P0 a P7 y de repente ellos se quieran crear un P5 ½ que puede ser aplicable para todos los casos que a ellos les dé la gana y a la final terminan contratando a todo el mundo bajo P5 ½ que no tiene ningún perfil, entonces eso genera también una contraposición a la norma de estipulación de un sistema único de remuneraciones, porque te permite que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados te cree un puesto y te invente una estructura nueva dentro del Estado, o sea nadie le puede decir cuántos abogados necesitan, cuántos ingenieros necesitan, que grado del ingeniero van a contratar, pero que sea dentro de una norma establecida armonizada para todo el Estado Ecuatoriano. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, nosotros estamos proponiendo para el artículo 114 otro inciso que podría de pronto ser una propuesta que armonice las cosas, dice para las instituciones en las cuales existen distintos niveles funcionales, grupos ocupacionales, rangos o jerarquías, el Ministerio de Relaciones Laborales previo al estudio técnico expedirá la escala de remuneraciones mensuales unificadas que corresponda, considerando las particularidades institucionales, dicha escala está enmarcada dentro de los rangos de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del servicio público y creo que con este inciso se dejaría claro que va ha ver una escala que corresponda a los GAD's, al trabajo específico, pero lo que yo creo que es fundamental es que anotemos el tema poniendo pisos que será realizado en forma progresiva. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, estoy de acuerdo, tiene que tener su escala porque no podemos ir a quebrar los gobiernos locales, sin embargo como decía el Asambleísta Aguilar no dejemos a libre albedrío. Interviene el Asesor Federico Medina, con ese inciso no se le está obligando a ninguna institución cuya peculiaridad no se le permita acoger una estructura totalmente rígida sino que imagínese el ejemplo, ahora el estado dice que los edificios pueden ser de máximo de 100 metros, entonces ellos sabrán si tienen 50 pisos, 5 pisos, o la cantidad de pisos que es necesario, podrían ser la cantidad que sea acorde con su peculiaridad, no le podemos exigir. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo pienso que la AME en ese sentido si tendrá una aceptación. Interviene el Dr. Guillermo Alvarez, Abogado de la AME, el día de ayer trabajamos conjuntamente con AME Y CONCOPE y también con la Confederación de Servidores Municipales, nosotros dejamos claro un asunto y esto también quiero dejarlo presente en esta mesa, nosotros no es que estamos conflictuando con los trabajadores, nuestro gran problema es el tema presupuestario, nuestro tema es que tenemos limitaciones por ley, nosotros de acuerdo a la ley tenemos limitaciones para el gasto corriente, además tenemos limitaciones también establecidas en distintas leyes para dedicarlos al pago de remuneraciones, los pisos por ejemplo tal como lo había señalado el Dr. Peñarreta, los pisos que se establece para el nivel central son muy superiores de los que efectivamente se pagan en el nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, pero no es porque no queremos respetar esa norma es simplemente que no tenemos los recursos, si es que ustedes ponen un valor de unos pisos en este momento, vamos a tener serias dificultades para pagar, nuestra posición es mas bien totalmente responsable en el sentido de que si aceptaríamos una propuesta como la que ahora se está discutiendo, simplemente no vamos a tener los recursos para pagar, ahora si es que hacemos de forma progresiva tendremos que modificar los límites presupuestarios que nos permitan a nosotros también excedernos en el gasto corriente para atender progresivamente esos valores pero entiendo que esta mesa no sé si este en la posibilidad de modificar las leyes que limitan el gasto de personal

en los gobiernos autónomos descentralizados. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, lo que si debemos tener en cuenta y estamos conscientes de lo que pasa en los gobiernos locales, es que también tendrán que optimizar los recursos humanos, ya a una persona mejor pagada ya podrán remplazar a dos o tres, yo hablo por mi Municipio de Loja, hay cinco personas atendiendo la misma ventanilla porque las cinco trabajaron por el Alcalde y tienen que ir, también hay que ir haciendo carrera del servicio público, y hay que ir tecnificando a esas personas e ir reduciendo, si aquí podemos ayudar en esta ley y de hecho estamos poniendo la calificación, la carrera de servicio público que les va a ayudar también a ustedes, diga usted o sea no es solo que estamos poniendo, eso sino que hay alcaldes que a mí también me están diciendo cuando sale la ley para ya poner en orden a la gente que está ahí que nos dejaron metiendo los anteriores porque, aquí decimos evaluación y con evaluación también tendrá que quedarse la gente que responda. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, entiendo perfectamente el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, de municipios pequeños y de grandes también, para este tema, pero nuestra obligación aquí es también preservar que los funcionarios que estén sujetos a esta ley tengan asegurados sus derechos que establezca la Constitución, o sea no podemos irnos contra una norma constitucional que dice que los funcionarios del servicio público estarán regidos por esta ley, que son parte de esta ley también los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados y que tiene que ser un ley en que se unifique los salarios donde existan pisos y techos, o sea eso lo dice la Constitución no podemos irnos contra eso, estamos buscando una salida porque entendemos que se puede quebrar a los municipios, no es ese el interés, lejos de lo que nos dijo el alcalde de donde era, de Riobamba, no es ese el interés, pero estamos proponiendo salidas que permitan de alguna manera ir regulando esto y poniendo a todos dentro de una misma norma porque no podemos dejar de hacerlo, entonces si estamos hablando que se pueda aplicar de una forma progresiva. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, si ponemos en el primer año el 20% en el segundo estar homologado el 40 en el tercero el 60 así serían cinco años, veinte por año y le ponemos una transitoria, la selección de los homologados será en función de su evaluación, los mejores evaluados se homologan el primer año, los siguientes en el segundo año, en cinco años, yo digo el primer año homologamos el 20%, yo digo propongamos una tabla en cinco años con un 20% anual y que sea en función de la evaluación, los mejores evaluados, los mejores puntuados se homologan eso va a ser un incentivo. Interviene el Dr. Guillermo Alvarez, esa puede ser un alternativa, pero eso significa que en cada año al menos debemos nosotros incluir en nuestros presupuestos un 20% adicional para el pago de estas cosas de lo que equivalga esa evaluación, eso significaría también modificar las leyes que nos permitan este destinar mayores recursos para gasto corriente. Interviene el Asambleísta Línder Altafuya, yo creo que esta Comisión, al elaborar como estamos haciendo lo de la Ley de Servicio Público, cuando se trata de los gobiernos descentralizados y autónomos debemos tener mucho cuidado para no aparecer como que aquí estamos con los alcaldes, o estamos con los empleados de los municipios del país, porque ese no es el ánimo nuestro aquí, el ánimo nuestro es desde el punto de vista de lo que significa los alcances de la ley de servicio público que esté así mismo apegada a los derechos que consagra la Constitución, pero a la vez nosotros tomamos muy en cuenta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, porque parten de las particularidades porque una de las cuestiones que tienen como características los municipios, las juntas parroquiales y los gobiernos provinciales es que están en contacto con la gente y su realidad, mal nosotros pudiéramos desde la Ley de Servicio Público regular lo que tienen que hacer los alcaldes en sus respectivos municipios, eso sería una situación totalmente desenfocada, nosotros no podemos hacer eso, por eso es que hay que respetar lo que la Constitución consagran en función de los organismos autónomos descentralizados, nosotros tenemos que ver de aquí los derechos que asisten a los trabajadores, a los

funcionarios, a los empleados de los municipios, hasta ahí llega nuestro ámbito digamos desde esta Comisión, pero de ahí la cuestión fuerte está en la Comisión de descentralización, donde se está discutiendo el Código de Descentralización, entonces yo más bien considero que si los alcaldes hicieron y estuvo bien que hicieran su congreso extraordinario de AME y plantearon de que se elimine o que se archive esos proyectos más se refería fundamentalmente al COOTAD y digo por lo siguiente, es cierto que los municipios y no me refiero solo a los municipios, todos los organismo autónomos descentralizados porque la junta parroquiales si bien es cierto se les ha dicho que se les va a dar \$106 millones de dólares, pero también tiene que decirseles que van ahora con el COOTAD, si es que se aprueba en los términos que está, van a ser perjudicados los finqueros donde va a pasar la obra del gobierno provincial que tiene que pagar el 60% del costo de dicha obra, o tiene que decirseles también que toda obra que realice el municipio de la parroquia dentro del ámbito del cantón, no solamente en el área urbana, también tiene que pagar el 100% de ese costo, ahí vamos a ver cómo van a reaccionar las juntas parroquiales y en lo que tiene que ver acá, yo si estoy de acuerdo con que se aumente la participación a los organismo autónomos descentralizados de la ley del 15% al 21% de la ley de eso para los ingresos permanentes y de los no permanentes del 5 al 10% como lo están planteando en el proyecto del COOTAD, en cambio si se toma en cuenta que ahora eso tiene que repartirse ya no en tres niveles de gobiernos sino en cuatro niveles de gobierno porque la constitución está creando el gobierno regional por ende el 21% va a ser compartido por el municipio, juntas parroquiales, gobiernos provinciales y gobiernos regionales, vamos a ver a cómo va a quedar, ya la formula ha repartido no para tres sino para cuatro, entonces esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque a veces cuando quedamos así que los alcaldes, no le pagan bien a sus empleados hacen lo que les da la gana, estamos dejando sueltos cabos, como estos, porque nosotros como legisladores tenemos la obligación de considerar, cuestiones integrales porque no podemos tampoco asfixiar a los municipios, tenemos que también que viabilizar que los municipios tengan recursos, que esos gobiernos regionales que se vayan a crear tengan recursos y que las juntas parroquiales ni se diga, yo soy del criterio que desde este comisión debemos considerar bien la relación de esta Ley de Servicio Público, para el ámbito que tiene que aplicarse por eso es que estaba planteado como excepción los gobiernos autónomos descentralizados porque tienen que dárseles un tratamiento particular, no estoy diciendo también que demos paso para el abuso de ciertos alcaldes irresponsables, justamente presidenta por eso estoy planteando, porque mire resulta que, a los empleados vienen y dicen, nosotros queremos seguirnos rigiendo por la ley que antes se regían, por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la LOSCA, ahora ellos dicen que quieren seguirse rigiendo, por una ley que el estado justamente ampare, eso los empleados de los municipios, en cambio los alcaldes, tiene una postura contraria a eso, eso tenemos la obligación de discutir, por eso esas discusiones de trabajo, para armonizar pues, para armonizar esa situación. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo propongo que si tiene aceptación la propuesta del Asambleísta Altafuya que tengamos reuniones para armonizar. Interviene el Ing. Jhonny Firmat, hay comentarios con los que yo no estoy de acuerdo, y cuando lo vea al secretario de la AME que estuvo aquí para coordinar fue a trabajar como comisionado al pleno, que se haya permitido comentar o decir, que yo tengo una postura igual a la de María Augusta Calle, igual a la de Fernando, Armando Aguilar, igual a la de Nivea Vélez, que estoy en contra de los municipios, como así, dejo aclarado esta situación ahora que está el señor representante de los municipios, mi postura porque yo también, nosotros como partido político, también tenemos municipios. La cuestión desde mi lado es que se armonice, que tratemos con seriedad este asunto, no podemos dar comentarios así como que si los alcaldes, están haciendo un desastre de sus administraciones, tiene que ser todos los empleados sometidos a lo que dice la Ley de Servicio Público, tenemos que considerar lo que está

diciendo como excepción la Constitución. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo quiero decirles una cosa, primero el debate no puede estar sustentado en comentarios, segundo, yo no tengo municipios porque yo no puedo decir que soy propietaria de municipios, yo tengo compañeros del movimiento mío que son alcaldes, pero no tengo municipios, y tercero yo ya quisiera tener la sensibilidad que han mostrado los compañeros de País en estos temas, acabamos de repartirles los documentos que se ha dialogado con la AME y la Confederación de Servidores Municipales y el CONCOPE y a mi si me gustaría que exitosamente esta comisión pueda llegar a lograr un acuerdo entre las tres instancias, y le voy a decir algo compañero Altafuya, sabe a dónde fue la AME a tratar de arreglar esta ley, al Ministerio de Coordinación Política, y yo me he negado y he dicho la ley se discute aquí, se debate aquí y se aprueba aquí. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, me admira que te molestes que te comparen con nosotros, en verdad nosotros hemos tenido una defensa a morir de los intereses de los trabajadores, y así lo vamos a seguir teniendo, esa es nuestra coherencia política, pero tampoco tenemos un actitud de ataque a los Gobiernos Seccionales, mal haríamos, no soy dueña como de los municipios, pero si tenemos compañeros de país que están ejerciendo esas funciones y creo que un número bastante superior al de MPD, sin embargo lo que estamos aquí tratando, es de ver como solucionamos este problema de acuerdo a la normas constitucionales, que es el único mandato, que para el caso de esta ley tenemos que cumplir, yo pediría por favor se lea el artículo 67 de la clasificación, señor secretario, lea el artículo 67. interviene el señor Secretario, Artículo 67 de la Clasificación.- El sistema de clasificación de puestos del servicio público, debe considerar principalmente el tipo de trabajo, su dificultad, su ubicación geográfica, complejidad y responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su desempeño, la clasificación contendrá el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo la distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos, la clasificación de puestos y su nomenclatura se expedirá por parte del Ministerio de Relaciones Laborales a excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, el Ministerio de Relaciones Laborales administrará el sistema de clasificación de puestos del servicio público y sus reformas. Interviene la Asambleísta María Augusta Calle, en este artículo hay un problema y es que esta ley hecha para que exista una organización del sector público, estamos aquí poniendo que se exceptúa de este punto a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir cada municipio hará su propia clasificación de puestos, sobre ese artículo por ejemplo los trabajadores no están de acuerdo, otro punto que es necesario tratarlo, el artículo 67 porque entonces no solamente estamos hablando de la necesidad de que progresivamente exista un piso en las remuneraciones de los trabajadores, de los funcionarios, estamos hablando de que cada municipio puede hacer lo que quiera, pueda hacer su propia clasificación de puestos, que puede fijar sus propios techos, o que tiene fijado los techos y que puede fijar sus propios pisos, no tendría sentido hacer la ley y estaríamos incumpliendo una norma constitucional, que dice expresamente que los GAD 's están dentro de la Ley de Servicio Público y que van a ser regulados por estos. Entonces a lo que yo invito en forma absolutamente fraterna a los compañeros de AME y de CONCOPE, es que veamos esta instancia de conversación y de negociación, veamos cuando, como y donde y vayamos sacando un articulado que nos ponga de acuerdo, a la parte de los alcaldes y a la parte de sus funcionarios y también a los Asambleístas, cuyo mandato fundamental es hacer que se cumpla la Constitución y frente a eso al menos hablo a nombre personal, no voy a ceder ni un ápice. Interviene el Asambleísta Armando Aguilar, o creo que aquí no está en debate, si les damos la razón a los alcaldes, si le damos la razón a los trabajadores municipales, por favor en esta comisión debemos sujetarnos estrictamente a lo que manda la constitución, y yo no me voy a prestar para botar una ley ni a aquí en la comisión, ni menos en el pleno que violenta lo que dispone la Constitución, el artículo 225 es claro, quienes son las entidades que están en el sector



público, si me dicen que no están los GAD's en el sector público por mandato constitucional, esta bien, tampoco voy a violentar al ley, en la constitución en el 229 en el segundo inciso dice claramente cuál es el único organismo rector en materia de remuneraciones y de recursos humanos, si me dicen y me demuestran que en la Constitución establece que los gobiernos autónomos y descentralizados también puede ser organismos rectores 221 municipios, 23 concejos provinciales que ellos pueden dictar su propia normativa, entonces cada uno va a dictar una propia ley de servidores públicos, lo que sería algo inaudito, inverosímil, fuera de todo contexto y de toda lógica jurídica y de racionalidad y yo como Asambleísta y como doctor en jurisprudencia no me voy a prestar para que se cometa una barbaridad jurídica, si nos demuestran que la Constitución establece regímenes especiales para los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de manejo de remuneraciones, que me demuestren constitucionalmente si eso es posible, no confundamos el tema de la autonomía, administrativa, política y financiera, eso es otro tema eso es completamente distinto, en esta ley no estamos invadiendo las competencias administrativas, es decir cada municipio dirá aquí necesito una secretaria, no le va a imponer absolutamente nadie si ahí tiene que poner dos o tres o una, en eso no se involucra esta ley lo único que hace es regular a los servidores públicos del país, si las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional han aceptado estar inmersos y regulados por esta ley, no se diga los trabajadores municipales que siempre han estado regulados por la LOSCCA, no podemos caer como digo en esta confusión jurídico Constitucional. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, Armando yo estoy totalmente de acuerdo me preocupan los presupuestos de los municipios, porque no es la intención de esta comisión quebrar a los municipios y tenemos que hacerlo de una forma responsable como acabamos de hacer con el tema de la aduana por ejemplo, yo quisiera dejar este artículo porque tiene que ver con otro que está pendiente y con el 3 inclusive para que lo trabajemos en forma conjunta en una sesión de trabajo ya inmediata tendrá que ser ya y nos vamos a poner de acuerdo con la AME, con la Confederación de Servidores Municipales, con el CONCOPE y con los 11 Asambleístas para poder trabajar y definir este artículo, yo creo que debemos darnos la oportunidad de dar una respuesta válida a estas tres instancias. Interviene el Asambleísta Linder Altafuya, señora Presidenta y compañeros Asambleístas, yo creo que esa es la forma, nosotros debemos ser propositivos, nosotros no debemos hacer aquí excluyente ni confrontativo, ese no es nuestro papel, nuestro papel es buscar consenso para que la ley que está en nuestras manos hacerlas y que la resuelva el Pleno, nosotros como comisión lo que hacemos es encausar aquí, para que salga en las mejores condiciones, entonces, yo a lo que vuelvo y recurro es al hecho, de que si hay entidades muy respetables en este país como son los gobiernos provinciales, como son los municipios, las juntas parroquiales, y hay también, los trabajadores de los gobiernos provinciales, los trabajadores y empleados, porque una cosa son los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo y otra cosa son ya los servidores públicos que van a registrarse por esta ley que nos corresponde a nosotros elaborar, nosotros tenemos es que buscar como armonizamos, porque nadie va a estar cerrado a la banda nadie, todo el mundo tiene que entender que aquí hay un Estado, que hay una sociedad, que hay pueblos que hay un país, etc., y que nos corresponde a todos poner nuestro grano de arena para ver como viabilizamos de mejor manera la solución de los grandes problemas que este país tiene, de eso se trata, por eso es que está demás, que aquí enseguida se pone epítetos, aquí enseguida se califique, acaso he hablado que como MPD nosotros tenemos municipios que son de nuestra propiedad, porque eso es un criterio bien atrasado, son criterios de cacique de derecha, nosotros como ustedes saben somos de izquierda revolucionaria, pero cuando yo me refiero de que el MPD tiene municipios, el MPD tiene gobiernos provinciales, y no estoy hablando de cantidad para hacer competencia con nadie, estoy hablando que nosotros si entendemos también lo que es la responsabilidad de tener un contando directo en la administración pública con el

pueblo, porque cuando se trata de buscarle solución a los problemas, la gente no es que está diciendo, vamos al Estado central, al gobierno central, a la Asamblea, la gente va a ir directamente al municipio, a la junta parroquial, ellos van directamente va al gobierno provincial. Yo lo que estoy alegando es que nosotros como asambleístas que estamos haciendo una ley también nos sintonicemos con eso, tomemos en cuenta es realidad, nada más es lo que estoy diciendo, por lo demás a mí me alegra, de que se esté trabajando conjuntamente con estos organismos y a la vez de que se siga planteando de que se va a ir buscando, no estoy de acuerdo compañeros, con eso de que los señores que están presentado el COOTAD en los términos que lo han presentado, y que aquí se nos dice ahí moriremos defendiendo eso, que van a defender, que la educación y la salud pasen a los municipios, que los municipios pongan el monto de las pensiones y del pago mensual de la educación, cuando la Constitución está diciendo que la educación es gratuita en los tres niveles primario, secundario y universidad, eso van a defender, esto que he dicho que se pretenda hacerle pagar a la gente el valor total de la obra pública, entonces para que el Estado, para que pagamos nuestros impuestos, a mí sí me alegra que haya una actitud de apertura y que así mismo como escuchamos a los empleados, que es nuestro deber escucharlos, escuchemos también a los alcaldes, a los prefectos, escuchemos a los gobiernos provinciales y digo esto porque justamente yo vengo con una experiencia yo fui Procurador Síndico del Municipio de Esmeraldas y después fui Consejero, Viceprefecto y Prefecto encargado, cuando nos toco defender los gobiernos provinciales que se los pretendía borrar del mapa. Lograron borrar la figura de consejero para crear las cámaras. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, compañero, si hay total apertura, yo debo recalcar la actitud de la AME que ha estado permanentemente insertada, quienes nunca han asomado por ejemplo el Sr. Paúl Grande es Presidente de la AME incluso hizo un acto donde entregó las propuestas de la AME, en el caso del CONCOPE nunca hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente el señor Prefecto Sánchez, más bien nosotros hemos tenido una actitud de preocupación de estarlos convocando, queda esto para fijar, yo quería ver si es posible para no entramparnos, en fijar una subcomisión que trabaje con el representante de la AME y del CONCOPE y los servidores para que ellos nos traigan el informe y poder avanzar porque si no nosotros tenemos otras tareas, yo quisiera Dorita pedirte que propongamos la conformación de una Subcomisión si es posible, para que trabaje, para que no sea toda la comisión, si no que la subcomisión a lo mejor de noche, de mañana pueda reunirse y trabajar. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, en el documento que entregamos, que especialmente habla del artículo tres, algunos otros artículos que no son temas muy difíciles que se pusieron de acuerdo en que inclusive ya entre servidores, entre AME y CONCOPE, que están en la matriz que se les acabo de entregar, si y en el artículo, en el que no se puede tener un consenso, es en el artículo 114, el tema de remuneraciones, los servidores municipales, hablan de que se indique el tema pisos, y quienes representan a AME y CONCOPE, no hablan del tema pisos solo del tema techos, el salario básico unificado estamos hablando de 240 dólares, es que esa es la posición de los servidores municipales, nosotros no podemos tomar una atribución que es de ustedes señores legisladores, de pronto podríamos recomendar pero para mí, en mi criterio como asesor, si recomiendo que debería ir un piso, porque una remuneración básica unificada de 240 dólares para un servidor, sinceramente no es una remuneración que permite a cualquier servidor como está la canasta básica cumplir con sus básicas necesidades. Interviene el Dr. Carlos Paladines, señora Presidenta, tal vez si se no permita a los asesores, establecer una disposición transitoria con una tabla de homologación que recoja todo esto, porque vamos hacer un ejemplo, durante el primer año, puede tenerse el piso, el señalado por los gobiernos seccionales, en un segundo año ya se pasa al piso regular de la ley, es decir todos estos temas, pueden quedar en un tabla de homologación muy bien señalada. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, una pregunta Carlos, pero a mí

me gustaría es una buena idea que el día viernes en donde los Asambleístas no podemos venir para no expresarme mal como hace un rato que me reclamo el compañero de la AME, podría ser el viernes pero también con el delgado de la AME y con el delegado de los servidores municipales, hasta eso ustedes hagan la propuesta, y sobre esa base discutamos, pero ya les pido a los señores asambleístas, que no vengan ese rato a desbaratar todo, si ya decimos los asesores trabajen en una propuesta, tengamos la predisposición también para escuchar y analizar técnicamente esa propuesta. Interviene el Dr. Guillermo Alvarez, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la propuesta planteada por la mesa de que se arme una subcomisión, dennos por favor la oportunidad de explicarles a ustedes, a los asambleístas, a los que hacen la ley, cual es la posición que tenemos como gobiernos autónomos descentralizados, rápidamente nosotros no estamos diciendo que los servidores municipales tienen que escapar de la aplicación de la ley uno, dos, reconocemos la rectoría porque es un disposición constitucional, lo que estamos diciendo es que tenemos que compatibilizar el tema de la autonomía garantizada constitucionalmente con las disposiciones de la rectoría y del servicio público, nada más, denos por favor la oportunidad de explicarnos jurídicamente y con datos la posición de los gobiernos autónomos descentralizados, es importante que ustedes vayan, ustedes como tomadores de la decisión, entiendan la posición y conozcan la posición, entonces como AME toda la apertura a cualquier hora y en cualquier momento. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo mociono que se nombre un comisión precedida por la señora presidente obviamente para hablar con el señor Presidente de la Asamblea a fin de que se nos extienda el plazo para la presentación del informe para segundo debate, en vista de la importancia de la ley. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, yo quisiera María Augusta que me permitas solo modificar que sea la Vicepresidenta la que presida la comisión, y que le explique al Presidente Cordero. Interviene el Armando Aguilar, Yo quisiera complementar esta moción de la comisión que vamos hablar con el Presidente de la Asamblea y decirle que por lo menos se nos amplíe un plazo de 30 días. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, vamos hacerles llegar entre hoy y mañana toda la matriz solo con los artículos que están pendiente. Interviene el Dr. Dario Peñarreta, lo que vamos a entregar es en los artículos que quedaron suspensos, o con nueva redacción, hay un cuadro que vamos a adjuntar que está en la matriz que les entregamos donde dice asesores para que ustedes les revisen, y en algunos textos que si es necesario hacer unas correcciones de derecho o de redacción y que ya fueron aprobados con el mayor de los respetos, señores Asambleístas hacemos una sugerencia para que ustedes si es que es necesario, se permitan revisarla, si no simplemente ira como fue discutido en el segundo debate y en esta Comisión, señores Asambleístas les entregamos mañana, les hacemos llegar por correo electrónico a cada uno de los Asambleístas para que ya vayan revisando el consolidado del texto. Interviene la señora Presidenta de la Comisión, hoy a las tres de la tarde se reinstala la sesión, a la hora que se acabe el pleno nos instalamos en sesión, porque hay el tema de los comerciantes minoristas fue un acuerdo que el primero de mayo tenían ellos su informe, no podemos fallar el primero de mayo es el día de los trabajadores y trabajadoras, traer los aportes.

Se clausura la sesión 13h00.

